Boletín Oficial

de la Provincia de Salta

GOBIERNO DEL EXCMO. Sr. INT. Nal. Dr. DON ERASMO MARTINEZ

DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN
CASA DE GOBIERNO

SALTA, VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 1931.

Año XXIII N.º 1400

Las publicaciones del **Boletín Oficial**, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y Administrativas de la Provincia — Art. 4.º Ley N.º 204.

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE GOBIERNO

DECRETOS

14094—Salta, 23 de Octubre de 1931.

Exp. N.º 5053—Letra F.—Siendo necesario proveer a la designación del puesto vacante de Escribiente adscripto a la H. Junta Escrutadora Nacional del Distrito Salta, de conformidad al Decreto N.º 14071 de fecha 16 del corriente mes,

El Interventor Nacional

DECRETA:

Art. 1.º.—Nómbrese al señor Antenor Saravia, Escribiente adscripto a la H. Junta Escrutadora Nacional del Distrito Salta, con la remuneración mensual que fija para dicho puesto el Artículo 1.º del Decreto N.º 14071 de fecha 16 de Octubre del corriente año.

Art. 2.º.—Tómese razón por Conta-

duría General, y hágase conocer de quienes corresponda.

Art. 3.º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
MARTINEZ—F. VALENZUELA.

14.095—Salta, 23 de Octubre de 1931.

Exp. N.º 5108—Letra P—Vista la Nota N.º 6413 de fecha 21 del corriente mes, de la JEFATURA DE POLICIA, haciendo conocer de esta Intervención Nacional que ha finalizado la licencia por el término de cinco meses concedida al Director de la Banda de Música Provincial, don Cayetano Riggio, actualmente en Europa, y en vista de haber gestionado nuevamente una prórroga de tres meses más de licencia, solicita la cesantía de dicho empleado teniendo presente que el causante no podrá presentarse a tomar servicio en la oportunidad debida, según lo expresa en la solicitud respectiva,

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1.º.—Nómbrese al señor Donato L. Nátola, Director de la Banda.

de Música Provincial, en reemplazo del ex-titular don Cayetano Riggio, quien queda cesante por razones de mejor servicio, debiendo el nombrado hacerse cargo de su empleo desde el día 1º de Noviembre próximo.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, desé al Registro Oficial y archívese.
MARTINEZ—F. VALENZUELA.

14096—Salta, 23 de Octubre de 1931.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo prescripto por el Artículo 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades, todo centro de población urbano cuyas rentas excediesen de TRES MIL pesos $\frac{m}{n}$ (\$ 3.000), está facultado para solicitar la creación de un Distrito Municipal independiente del departamento en que estuviera situado, siendo evidente a tal efecto que la localidad de LA CANDELARIA, parte integrante del departamento del mismo nombre, y las zonas y centros poblados que le son circunvecinos, satisfacen los requisitos establecidos por el Artículo 10º y correlativos de la mencionada ley de Municipalidades.

Que atento a lo establecido por el Artículo 171, Sección Sexta de la Constitución de la Provincia - DEL REGIMEN MUNICIPAL - sobre la forma, división y categoría que rigen para la clasificación de las Municipalidades, corresponde asignarle a la localidad de «La Candelaria», el carácter de Distrito de tercera categoría, toda vez que su población así lo determina.

Que a objeto de dar la eficiencia necesaria al Gobierno Comunal, es imprescindible procurar una mayor autonomía a los núcleos de población, que por la importancia que cobran sus elementos integrales, de suyo se encuentran capacitados para obtener una administración inmediata de sus intereses propios.

Por consiguiente:

El Interventor Nacional,
en acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1º.— Créase un Distrito Municipal de tercera categoría con sede en la localidad de «La Candelaria», departamento del mismo nombre, el que funcionará independientemente del de «El Tala», debiendo ser fijados oportunamente los límites del nuevo Distrito Municipal a los efectos de su delimitación territorial por las HH. CC. Legislativas de la Provincia, en mérito a lo prescripto por el Art. 172 de la Constitución Provincial.

Art. 2º.— Nómbrase Comisionado Municipal del Distrito de «La Candelaria», al Sr. Francisco J. Astigueta.

Art. 3º.— Comuníquese, publíquese, desé al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ - F VALENZUELA.

14097—Salta, 26 de Octubre de 1931.

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º.— Nómbrase al señor Vicente Mitchell Sasso, Comisario de Policía de Campaña, con la remuneración mensual que por Presupuesto le corresponde, debiendo la Jefatura de la Provincia determinar su destino.

Art. 2º.— Comuníquese, publíquese, desé al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ - F. VALENZUELA.

14098—Salta, 26 de Octubre de 1931.

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º.— Nómbrase al señor J. Navor Gómez, Encargado de la Oficina de Registro Civil de San Carlos, en reemplazo de don José Miguel Serrano.

Art. 2º.— Comuníquese, publíquese, desé al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ - F. VALENZUELA

14.099—Salta, 26 de Octubre de 1931.

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º.—Nómbrese a don Isidro Femayor, Sub-Comisario de Policía «ad-honorem» de «El Naranjo» Departamento de Rosario de la Frontera.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ - F. VALENZUELA

14.100—Salta, 26 de Octubre de 1931.

Exp. N° 5131—G—Vista la renuncia presentada con fecha 10 del corriente mes, por don Jose Gómez (hijo), del cargo de Juez de Paz Propietario del Distrito de «San José de Orquera» (Metán), fundada en la circunstancia de tener que ausentarse definitivamente de esa localidad,

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º.—Acéptase la renuncia presentada por don José Gómez (hijo), como Juez de Paz Propietario del Distrito de San José de Orquera (Metán), en mérito de las causales que la motivan.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ - F. VALENZUELA

14.101—Salta, Octubre 27 de 1931.

Exp. N° 5072—A—Vista la renuncia presentada con fecha Octubre 17 del corriente año, por el señor Avelino Aráoz, del cargo de Intendente Municipal de la Capital, fundada en el hecho de haber aceptado su candidatura como Gobernador de la Provincia,

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º.—Acéptase la renuncia del señor Avelino Aráoz, del cargo de Intendente Municipal de esta capital; y désele las gracias por los importantes servicios públicos prestados.

Art. 2º.—Nómbrese al señor Carlos Götting, Intendente Municipal de ésta Capital.

Art. 3º.—Hágase conocer el presente decreto de quienes corresponda.

Art. 4º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ - F. VALENZUELA.

14.104—Salta, Octubre 27 de 1931.

Expediente número 4946 — B —

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º.—Déjase sin efecto el decreto N° 14.044 de fecha 13 de Octubre del corriente año por el que se nombra a don José Acosta, Sub-Comisario de la Policía volante comasiento en «Los Rosales», 4ª. Sección del Departamento de Metán.

Art. 2º.—Nómbrese al señor Segundo Orellana García, Sub-Comisario de Policía Volante con asiento en «Los Rosales», 4ª. Sección del Departamento de Metán, en reemplazo de don José Acosta.

Art. 3º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ. - F. VALENZUELA.

14.106—Salta, Octubre 26 de 1931.

Exp. N° 5116—P—Vista la nota: N° 4628 de fecha 22 del corriente mes, de la Jefatura de Policía, elevando a consideración y resolución de esta Intervención Nacional, una comunicación suscrita por el señor Médico de Policía, por la cual declara: que el penado Pedro Abraham Mamaní recluso en la Cárcel Penitenciaria del Departamento Central de Policía, se halla afectado de una enfermedad infecto-contagiosa (tuberculosis), que reviste una sintomatología progresiva de gravedad, representando de consiguiente un serio peligro para los demás reclusos en dicho establecimiento carcelario; y

CONSIDERANDO:

Que el penado Pedro Abraham Mamaní, durante el tiempo que lleva de reclusión ha observado un comportamiento bueno, de conformidad a lo

informado por la Jefatura de Policía, con fecha Setiembre 3 ppdo., corriente a fs. 120 del Exp. N° 391 de la Sala en lo Penal de la Excma. Corte de Justicia de la Provincia, sobre solicitud de indulto del referido penado.

Que en mérito a lo expresado por el señor Médico de Policía, y del examen clínico concordante practicado al causante por el señor Médico de Tribunales, en 4 de Setiembre último cte. a fs. 121 y vta. del Expediente N° 391, se encuentra comprobado suficientemente el carácter crónico y la gravedad de la afección que sufre dicho penado, quien requiere ser sometido a un tratamiento que exige inmediata excarcelación, toda vez que la naturaleza de la enfermedad infecciosa de que adolece, así lo determina.

Que en atención a las causales expresadas, de acuerdo a lo aconsejado por la Sala en lo Penal de la Excma. Corte de Justicia de la Provincia, según Resolución dictada con fecha 17 de Setiembre del corriente año, fs. 123 y vta. y 124 del Expediente N° 391; y en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el Inciso III del Artículo 129-Capítulo III de la Constitución de la Provincia,

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1°.—Indúltase al penado Pedro Abraham Mamani, del término de tiempo que le falta para cumplir la condena que le fuera impuesta por la Sala en lo Penal de la Excma. Corte de Justicia de la Provincia, por sentencia de fecha 15 de Mayo de 1930

Art. 2°.—Hágase conocer el presente decreto de la Sala en lo Penal de la Excma. Corte de Justicia de la Provincia, y oficiese en consecuencia al señor Jefe de Policía, a su efectos.

Art. 3°.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ F. VALENZUELA

14107—Salta, Octubre 26 de 1931
Expediente N° 1607—Letra M.—

Vista la Nota N° 201/s. de fecha 3 de Enero del corriente año, del Ingeniero de las Obras de Saneamiento y Riego de la Nación en Salta, D. Alfredo Brián, haciendo saber al Gobierno de la Intervención Nacional, que la Primera parte del canal Principal a partir del Dique de toma para riego, cuya construcción se encuentra terminada en el Río Arias, inmediatamente aguas abajo de la confluencia de los ríos Peñalba y San Lorenzo,—formando parte de las Obras de Saneamiento y Riego de la Ciudad de Salta,—debe tratarse forzosamente en una longitud aproximada de Un Mil setecientos sesenta metros (1.760 m.) en terrenos de propiedad de los señores Zorrilla Hermanos, debido a las condiciones topográficas del lugar acompañando a los efectos consiguientes, un plano de los terrenos que afectará la construcción del citado canal y los cómputos métricos, superficie y características de dichos terrenos;—y

CONSIDERANDO:

Que D. Ricardo Zorrilla Uriburu, propietario de la finca "Las Costas" expone en su presentación de fecha 5 de Febrero del corriente año, que:—1° Los terrenos sujetos a expropiación son parte integrante de potreros alambrados y cultivados, por dentro de los cuales y hacia el límite Sud de los mismos corre la llamada "acequia municipal que les suministra bebida;" 2° Que según el plano, la expropiación deja hacia el Sud, lindando por el Este con terrenos de Patrón Costas, una fracción de una superficie de algo más de una hectarea, la que queda completamente aislada del resto de la finca y sin comunicación posible con ella".

Que de conformidad a lo informado por el señor Ingeniero recurrente de las Obras de Saneamiento y Riego de la Nación en 5 de Marzo ppdo. cte. a fs. 28 el reparo opuesto por el propietario en el 2° punto precedentemente transcrito en el anterior

considerando, carece de fundamento dado que en el callejón marcado en el plano respectivo, se construirá un puente que corresponde al indicado en la progresiva Km. 1.630, como puente de desagüe.

Que atento a los extremos señalados en la nueva presentación del señor Ricardo Zorrilla Uriburu de fecha 10 de Agosto ppdo.; a lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno, en Setiembre 18 del corriente año y 15 del actual mes; al informe de la Dirección General de Obras Públicas de la Provincia de fecha 21 del mismo; y de conformidad a la expropiación autorizada por la Ley N° 6835, de fecha 14 de Abril de 1928 modificativa del Artículo 2° de la correlativa Ley de 18 de Marzo de 1928,

*El Interventor Nacional,
en acuerdo de Ministros*

DECRETA:

Art. 1°.—Acéptase la transferencia que con fecha Agosto 10 del corriente año, hace don Ricardo Zorrilla Uriburu, a favor de la Provincia de Salta, del dominio de los terrenos de la finca "Las Costas", los que deberán ocuparse para las obras de embellecimiento de la Ciudad de Salta, a cargo del Gobierno de la Nación, y que, según el plano formulado por la Seccional local de la Dirección de Irrigación de la Nación encargada de las obras de saneamiento y riego de esta Capital, y los cómputos métricos respectivos, ocupan las siguientes superficies:

a). Superficie inculta:—7.178 metros cuadrados con 01/100. (Siete mil ciento setenta y ocho metros cuadrados 01/100).

b). Superficie cultivada—22.198 metros cuadrados con 74/100 (Veintidos mil ciento noventa y ocho metros cuadrados con 74/100); formando así una superficie total de Dos hectáreas Nueve mil trescientos setenta y seis metros cuadrados con setenta y cin-

co decímetros cuadrados. (2 Ha., 9.376 metros cuadrados con 75 decímetros cuadrados.)

Art. 2°.—La transferencia aceptada en el Art. anterior, tiene las bases siguientes:

a). La Provincia de Salta reconoce a don Ricardo Zorrilla Uriburu, el derecho de utilizar para bebida de los animales de su propiedad, el agua de la llamada "Acequia Municipal" que corre por dentro de potreros alambrados y cultivos hacia el límite Sud de los terrenos transferidos.

b). Para el goce de ese derecho, el Gobierno de la Provincia se compromete a construir bebederos en los sitios que sean indispensables, una vez ejecutada la obra de referencia, los que serán ubicados de común acuerdo con don Ricardo Zorrilla Uriburu antes de construirse los alambrados que separarán en todo su trazado al canal principal del dique de toma para riego del límite de la propiedad del cesionario.

c). La construcción del puente de acceso a la fracción de terreno de la finca "Las Costas" que por las obras del canal queda aislada, estará a cargo del Gobierno de la Nación, de conformidad al proyecto lanimétrico de dicha construcción.

d). El Gobierno de la Provincia gestionará del Banco Hipotecario Nacional, la aprobación del convenio a formalizarse en base a la presente transferencia o donación y sus condiciones, toda vez que la finca "Las Costas" reconoce un gravámen hipotecario a favor de la referida institución.

Art. 3°.—Remítase el presente Exp. con copia autenticada de este decreto a la Escribanía de Gobierno de la Provincia, a objeto de su escrituración y registro, y hágaselo conocer de la Dirección General de Irrigación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y del señor Ingeniero de las Obras de Saneamiento y Riego de

esta Capital, a los efectos a que hubiera lugar.

Art. 4º.—Comuníquese, publíquese, se dése al Registro Oficial y archívese MARTINEZ -- F. VALENZUELA

Nº 14.108 Salta, 27 de Octubre de 1931. Expediente Nº 5145. Letra A—Vista la Nota Nº 312 de fecha 27 del corriente mes, del Sr. Jefe del Archivo General de la Provincia, elevando a consideración y resolución de esta Intervención Nacional, la solicitud de licencia presentada por la Escribiente de dicha Dependencia, señorita Carmen Albrecht.

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º—Concédese quince días de vacaciones, a contar desde el 2 de Noviembre, a la Escribiente del Archivo General de la Provincia, señorita Carmen Albrecht, de conformidad a lo establecido por el artículo 2º del Decreto de fecha 13 de Marzo de 1931.

Art. 2º—Tómese razón por Contaduría General a sus efectos.

Art. 3º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese, MARTINEZ—F. VALENZUELA

14.109 Expediente Nº 5144 C. Vista la nota Nº 379 C. C. de fecha 26 de Octubre del presente año, el señor Presidente de la Comisión de Caminos de la Provincia elevando a consideración y resolución del Gobierno de esta Intervención Nacional el acta número 156 de fecha 7 del corriente mes, la que en su parte dispositiva literalmente dice:

ACTA Nº 156

«En Salta, a los siete días del mes de Octubre de 1931, siendo horas catorce, reunidos en el local de la Dirección de Obras Públicas los señores miembros de la Comisión de Caminos, Dr. Ernesto Solà e Ingeniero Eduardo Arias, sin la asistencia del Dr. Martín Gómez Rincón, bajo la presidencia del Director de la mencionada repartición, Ingeniero Nolasco F. Cornejo se pasó a considerar los siguientes puntos:

1º—Vista la Nota de fecha 10 de Septiembre del corriente año, suscrita por los vecinos del Departamento de Guachipas, solicitando la suma de UN MIL pesos para la reparación del camino que une el lugar denominado La Vaquería, con el pueblo de Guachipas, Resuelve:

a) Acordar la suma de UN MIL pesos para la reparación solicitada.

b) Encomendar la dirección del mencionado trabajo y la administración de los fondos acordados, a una comisión formada por los señores Silverio Chavarría Belisario Correa y Tristán López con cargo de rendir oportunamente cuenta.

c) Comunicar al Poder Ejecutivo la precedente Resolución.

2º—Siendo indispensable proceder a la construcción de un acueducto en la parte en que el arroyo de la Choza atraviesa el camino que va de Vaqueros a Lesser y a los Yacones, para el cual se acordó en acta número 138 la suma de QUINIENOS pesos, la que posteriormente fué transferida por Acta Nº. 145 para la prosecución

del enripiado del mencionado camino, se resuelve efectuar dicha obra por administración tomando al efecto dos albañiles y un peón ayudante con un jornal de CINCO pesos diarios cada uno de los primeros y dos pesos diarios el último. Este trabajo consistirá en la construcción de caños de hormigón armado de un metro de diámetro y colocación de los mismos en dos tubos a la par de cinco metros de largo, como así también la construcción de aletas de piedra re-juntada de un espesor no menor de cincuenta centímetros.

3°—Siendo igualmente indispensable cubrir con un terraplén el acueducto que se menciona en el punto anterior, obra que importará la suma de DOS CIENTOS pesos según presupuesto presentado por el Sr. Jarvan Sen, se Resuelve: Ejecutar dicha obra, encargando los trabajos al Sr. Jarvan Sen, por la suma de DOS CIENTOS pesos.

4°.—Habiéndose terminado el abovedamiento de un tramo de tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros del camino que une San Francisco con San Agustín pasando por Valdivia, para el cual se aprobó por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 16 de Setiembre la suma de Un mil novecientos noventa y nueve con ochenta y cuatro centavos acordada en el punto octavo del Acta N°. 152 y siendo de imperiosa necesidad consolidar la calzada del mismo mediante su enripiado, se RESUELVE: a). Proceder al enripiado del tramo de tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros del camino

que une San Francisco con San Agustín pasando por Valdivia, el que se hará en un ancho de cuatro metros, un espesor no menor de diez centímetros con ripio que no pase de cinco centímetros de diámetro, por el precio de Sesenta y cinco centavos el metro lineal, lo que hará un total de dos mil ochocientos cincuenta y seis pesos. b). Adjudicar el mencionado trabajo al señor Pedro Cattanesi; c). Solicitar del Poder Ejecutivo su correspondiente aprobación.

5°.—Habiendo solicitado el Ingeniero Alfonso Peralta en telegrama de fecha 31 de Julio de 1931, en su carácter de Comisionado Municipal de Güemes y verbalmente el Arquitecto encargado de las Obras del Hospital Regional en dicha localidad, la cooperación de esta Comisión para la apertura de una calle de acceso al referido Hospital, la que tendrá una longitud de Trescientos diez y ocho metros, se RESUELVE: Contribuir con los gastos que demande el abovedamiento, enripiado y mano de obra del alambrado de la mencionada calle.

Y considerando que las obras de construcción, reparaciones, y demás disposiciones de que informa el Acta precedentemente transcrita, que se expresan en los puntos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° resueltos por la H. Comisión de Caminos, en mérito á las obligaciones y derechos que le acuerdan la Ley N°. 3460 de Mayo 20 de 1926 y su complementaria de Setiembre 30 de 1926, son de evidente utilidad pública,

El Interventor Nacional en acuerdo de Ministros.

DECRETA:

Art. 1º.—Apruébase el Acta N° 156 de fecha 7 de Octubre del corriente año, de la Comisión de Caminos de la Provincia, precedentemente transcrita.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ — F. VALENZUELA.

N° 14.110. Salta, Octubre 28 de 1931. Expediente N° 5151 C. Vista la renuncia presentada con fecha 24 del actual mes por don Ernesto Córdoba, del cargo de Juez de Paz Suplente del distrito municipal de General Güemes, y atento a la propuesta presentada por el señor Comisionado del mismo en 26 del corriente, para el reemplazo del dimitente, de conformidad a lo prescripto por el artículo 57 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º.—Acéptase la renuncia presentada por don Ernesto Córdoba del cargo de Juez de Paz Suplente de General Güemes.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese,

MARTINEZ— F. VALENZUELA

14.115 — Salta, 30 de Octubre de 1931.

Expediente N° 5172 — Letra R.

Vista la Nota N° 211 de fecha 29 del cte. mes, de la DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, proponiendo la designación de titular para la oficina de Registro Civil de La Silleta;

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º. — Nómbrase Encargada de la Oficina de Registro Civil de «La Silleta» — Departamento de Rosario de Lerma— a la señorita Lucia Bertini, en reemplazo de D. Telésforo Paz Ovejero, —quién desempeña interinamente dicho puesto, por no haberse hecho cargo del mismo el ex—titular D. Enrique Gutiérrez, que renunció.

Art. 2º. — Reconócese los servicios prestado por D. Telésforo Paz Ovejero, por diez y nueve días (19) del mes de Agosto ppdo., y por el mes de Setiembre del cte. año, hasta la fecha de que se haga cargo de la oficina de R. Civil de «La Silleta» su reemplazante, dado que durante aquel término de tiempo desempeñó interinamente la misma, por no haber actuado, D. Enrique Gutiérrez, y déjase sin efecto las órdenes de pago de sueldo correspondiente al tiempo mencionado, y libradas a favor de este último, en mérito a la razón expuesta.

Art. 3º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ—F. VALENZUELA.

RESOLUCIONES

N° 621

Salta, Octubre 29 de 1931.— Expediente N° 5152—Letra M.— Vista la Nota N° 167 de fecha 23 del corriente mes, del señor Comisionado Municipal de Rosario de Lerma, don Alberto B. Rovaletti, solicitando la correspondiente autorización de este Ministerio,

para reducir la remuneración mensual que fija el Presupuesto vigente de la Comuna respectiva, a la partera municipal, señorita Carmen R. Hinojosa, quién fuera designada de conformidad a lo dispuesto por el Decreto de fecha Octubre 13 de 1930 y atento a las razones que fundamenta dicha solicitud.

El Ministro de Gobierno

RESUELVE:

Art. 1º—Autorízase al Sr. Comisionado Municipal de Rosario de Lerma, don Alberto B. Rovalletti, para reducir y fijar en la cantidad de cincuenta pesos $\frac{m}{n}$ (\$ 50) la remuneración mensual que corresponde a la Partera Municipal, señorita Carmen R. Hinojosa, en concepto de retribución, por la atención gratuita del servicio sanitario correspondiente.

Art. 2º—Insértese en el Libro de Resoluciones, comuníquese y archívese.

F. VALENZUELA

Ministro de Gobierno

JULIO FIGUEROA MEDINA

Oficial 1º de Gobierno

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETOS

14102.—Salta, Octubre 26 de 1931.

Habiendo fallecido en el día de hoy el señor Laudino Pereyra, Contador General de la Provincia, y en consideración a los importantes servicios que ha prestado con todo celo y competencia a la Administración Pública, durante treinta y tres años,

El Interventor Nacional en Acuerdo de Ministros.

DECRETA:

Art. 1º.—Designar una comisión de

empleados de la Contaduría General para que velen el cadáver; al señor Sub-Secretario de Hacienda para que haga uso de la palabra en el acto de la inhumación de sus restos y enviar una nota de pésame a la familia del extinto, con transcripción del presente Decreto.

Art. 2º.—Costear los gastos del sepelio, debiendo imputarse a la partida de «Imprevistos».

Art. 3º.—Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ - F. VALENZUELA

14103.—Salta, Octubre 27 de 1931.

Siendo necesario proveer el cargo de Contador General de la Provincia por fallecimiento del titular y de acuerdo con el Art. 129 inc. 15 de la Constitución,

El Interventor Nacional,
DECRETA.

Art. 1º.—Designase en comisión para desempeñar el cargo de Contador General de la Provincia al Perito Contador de esta Intervención Nacional don Alfredo Honorio Berros.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ.—F. VALENZUELA.

12105.—Salta, Octubre 28 de 1931.

Existiendo en Tesorería General varios documentos a favor del Gobierno de la Provincia, procedente del cobro de diversos impuestos fiscales de conformidad a las Leyes respectivas y siendo facultativo del P. E. disponer de esos valores con el objeto de atender los sueldos y gastos de la Administración.

El Interventor Nacional,
DECRETA:

Art. 1º.—Autorízase al Tesorero General para que efectue el descuento de dichos documentos en el Banco Español del Rio de la Plata de esta Capital hasta la suma de Ciento Cuatro Mil pesos m/l. y para que firme

los endosos respectivos conjuntamente con el Contador General de la Provincia.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, insértese en el R. Oficial y archívese.

MARTINEZ - F. VALENZUELA

14111.—Salta, Octubre 29 de 1931.

Habiendo sido nombrado el señor Segundo Orellana Garcia Sub-Comisario de la Policia Volante, con asiento en «Los Rosales» (Metán), y encontrándose comprendida en esa circunscripción la localidad de San-José de Orquera, cuya Sub-Comisaría fué suprimida,

El Interventor Nacional,

DECRETA.

Art. 1º.—Nómbrese Expendedor de Guias, Transferencia de Cueros, Marcas y Multas Policiales de San-José de Orquera (Metán) al señor Segundo Orellana Garcia.

Art. 2º.—El nombrado antes de tomar posesión del cargo deberá prestar la fianza respectiva de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 77 de la Ley de Contabilidad de la Provincia, previa aprobación de la misma por el Ministerio de Hacienda.

Art. 3º.—Comuníquese, publíquese, insértese en el R. Oficial y archívese, MARTINEZ.—F. VALENZUELA.

14112.—Salta, Octubre 29 de 1931.

Vista la solicitud de licencia presentada por el señor Inspector del Banco Provincial de Salta don Manuel Antonio Arias, atento los motivos de salud en que la funda, justificada por el certificado médico que acompaña, y lo informado por Contaduría General,

El Interventor Nacional,

DECRETA:

Art. 1º.—Cóncedese un mes de licencia, con goce de sueldo, al señor Inspector del Banco Provincial de Salta, don Manuel Antonio Arias, de conformidad con el Art. 5º. del Presupuesto vigente.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ—F. VALENZUELA

14113.—Salta, Octubre 29 de 1931.

Siendo necesario adbitrar fondos para regularizar los pagos de la Administración, y

CONSIDERANDO

Que según lo dispuesto por el Art. 6º. de la Ley de Emisión de «Obligaciones de la Provincia de Salta» de 30 de Setiembre de 1922 los fondos de los impuestos al consumo no podrán disponerse para gastos generales de la Administración sino en los casos que haya sobrantes, después de asegurados los servicios de amortización e intereses de las Obligaciones emitidas.

Que encontrándose cumplida al presente la disposición legal transcrita y además la recaudación mensual de los impuestos al consumo produce al erario público una cantidad por lo general mayor de \$ 80.000.-, y siendo una medida de buen gobierno asegurar la puntualidad en los pagos de la Administración,

El Interventor Nacional

DECRETA:

Art. 1º.—Transfírase la suma de \$ 40.000.- (cuarenta mil pesos m/l. en el Banco Provincial de Salta de la cuenta «Ley Nº. 852 a la cuenta «Rentas Generales» del Gobierno de la Provincia con la correspondiente intervención de Contaduría y Tesorería General.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. MARTINEZ F. VALENZUELA

14114.—Salta, Octubre 29 de 1931.

Habiéndose llevado a término la impresión de las Obligaciones de la Provincia de Salta destinadas a la renovación de 1931 bajo la fiscalización del señor Arturo F. Olmos, designado para ese efeco Represente del Gobierno por acuerdo de Ministros

de fecha Setiembre 11 del corriente año, y siendo necesario fijar la asignación que le corresponde para atender los gastos originados durante el desempeño de su cometido,

*El Interventor Nacional, en
Acuerdo de Ministros:*

DECRETA:

Art. 1º.—Líquidese a favor del Sr. Arturo F. Olmos la suma de Un Mil pesos m/l. en concepto de gastos y remuneración de servicios correspondientes a su intervención como Representante de este Gobierno, en la impresión de las Obligaciones de la Provincia de Salta-Renovación-1931 con imputación a la Ley de 24 de Enero de 1928.

Art. 2º.—Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ - F. VALENZUELA.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SALA EN LO PENAL

SENTENCIAS

CAUSA:—ORDINARIO por filiación natural. Julio Emilio Cari vs Suc. de Estanislao Zapana.

Salta, Abril 6 de 1931

VISTOS por la Sala en lo Civil de la Corte de Justicia los autos del juicio sobre declaración de filiación y petición de herencia seguido por Pilar Cari, como madre natural del menor Julio Emilio Cari, contra la sucesión de Estanislao Zapana, en apelación de la sentencia de fs. 35 a 40 y fecha Noviembre 7 de 1930, por la cual el señor Juez de 1ª. Nominación en lo Civil rechaza la demanda, con costas, y regula en doscientos cincuenta pesos el honorario del doctor César Alderete.

Y CONSIDERANDO:

Que el causante manifestó a cada uno de los cinco testigos que el me-

nor Julio Emilio era hijo natural suyo, en un caso delante de otras personas (Ulloa) y en otros agregando que pensaba educarlo, a cuyo fin lo recogería del poder de la madre cuando tuviera un año (Esteban y Flores), es en definitiva lo solo que de la única prueba aportada resuelta, pues que a ello concretan todos los deponentes al alcance de sus respuestas afirmativas a la pregunta sobre el conocimiento de la filiación alegada y la correspondencia que, según el testigo Esteban, cambiara al respecto el causante con la madre del menor no ha sido presentada.

Que tal manifestación importa un acto verbal de reconocimiento pero ni reiterada alcanza a constituir la posesión de estado cuyo goce condiciona el ejercicio de la acción de filiación despues de muerto el presunto padre (art. 325 còd. civil), pues carece del contenido material y permanente susceptible de crear el ambiente social inequívoco que cubre la falta de una forma auténtica en el reconocimiento privado: la actuación como padre, es decir, en el caso, dada la corta edad del menor, la relación del causante con la madre, la atención en el parto, la contribución al sustento, los cuidados por el nacido, las visitas u otras actitudes así constantes y naturales de una conducta paternal.

Que el honorario regulado en el fallo, al letrado representante de la parte vencedora, no aparece exiguo si setiene en cuenta lo somero de la contestación de la demanda, lo pasivo de la intervención durante la prueba y lo erróneo de las conclusiones del alegato.

CONFIRMA en todas sus partes la sentencia apelada; con costas, y regula en cuarenta pesos el honorario del doctor César Alderete.

Cópiese, repóngase, notifíquese y bae.—David Saravia, Humberto Cánepa.—Secretario Letrado: Mario Saravia.

CAUSA:—ORDINARIO— Rendición de cuentas.—Pedro Caprotta vs. Gregorio González.

Salta, Abril 6 de 1931

VISTOS por la Sala en lo Civil de la Corte de Justicia los autos del juicio sobre rendición de cuentas seguido por Pedro Caprotta contra Gregorio González, en apelación de la sentencia de fs. 110 a 116 vta. y fecha Junio 26 de 1930, que rechaza la demanda y acoge la reconvencción, condenando al actor a rendir cuenta de las operaciones realizadas, relativas a la habitación, desde el 15 de Octubre de 1928 hasta el 15 de Octubre de 1929; con costas.

Y CONSIDERANDO:

Que ambas partes han admitido la conclusión del fallo en cuanto a que la relación entre ellas fué de habitación, no de sociedad.

Que la suma de \$ 412, 60 de la que el actor exige rendición de cuentas en definitiva no sería sino una partida mas en el «debe» del demandado.

Que, por consiguiente, la cuestión que plantean la demanda y la reconvencción es la de la rendición formulada por el actor.

Que tal rendición es procedente en tanto limita el derecho del demandado al 30 de Abril pues que entouces cesó su actuación en el negocio.

Que, en efecto, el porcentaje del treinta por ciento estipulado como remuneración de servicios presupone la prestación de éstos.

Que si tales servicios dejan de prestarse, por arbitrariedad del principal, la obligación es la de indemnizar (art. 158 cód. comercial).

Que las cuentas rendidas son inaceptable en cuanto arrojan un saldo de \$ 822, 75 a favor del actor (incluida la suma de 412,60, importe de las cuentas que el actor dice cobradas).

Que, en efecto, según la pericia practicada, el treinta por ciento suma \$ 2584, 60 y lo reiterado alcanza a \$ 2561,76, sin que haya prueba al-

guna de la cobranza de las cuentas.

Que la pequeña diferencia entre ambas sumas, no es computable, pues puede atribuirse a los errores anotados por la pericia en la contabilidad llevada por el demandado.

CONFIRMA la sentencia en tanto rechaza la demanda, y la REVOCA en cuanto acoge la reconvencción, que también se rechaza, debiendo las costas de ambas instancias pagarse en el orden causado.

Cópiese, repóngase, notifíquese y bajen.—David Saravia, Francisco Sosa, Humberto Cánepa.—Secretario Letrado: Mario Saravia.

Causa:—Contra Juan Angel Vizgarra ó Montero por violación de domicilio y agresión con armas a Juan José Herrera.

Salta, Abril 7 de 1931.

I VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 42 por el letrado defensor del procesado Juan Angel Vizgarra ó Montero contra el auto de prisión preventiva corriente a fs. 40.

CONSIDERANDO:

Que con las declaraciones de los testigos Soria fs. 10-13; Molina fs. 14-17; Humberto Saravia fs. 22-24 y Sebastián Saravia, fs. 25-26, resulta comprobado, «prima-facie», que el procesado se trasladó, en la madrugada del día tres de Enero en curso, hasta la casa de negocio de los hermanos Torres situada en San Martín —Anta y penetró, acompañado de José María Soria y Adolfo Molina, hasta la Galería posterior de la misma donde dormía el dependiente Juan José Herrera, a quien agredió, a mano armada, por haberse rehusado despatcharle bebida;

Que de las declaraciones antes mencionadas surge la semi-plena prueba de la existencia del delito previsto en el art. 105 del Cód. Penal é indicios suficientes, a juicio de ésta Sala,

de ser Juan Angel Vizgarra ó Montero autor de él.

Que de las constancias de éste sumario no resultata justificada la semi-plena prueba de la existencia del delito de violación de domicilio, ni surgen indicios de ser el procesado autor responsable del mismo, desde que las manifestaciones de la víctima y la de los testigos presenciales comprueban que Vizgarra llegó solamente hasta la galería exterior de la parte posterior de la casa de los hermanos Torres, cosa que, por la índole de los negocios a que estaba destinada y modalidades propias de la vida de nuestra campaña, estaba lógicamente, entregada libre al acceso del público.

Que, por otra parte, cabe advertir que el procesado llegó hasta la galería donde dormía Herrera acompañado por Soria y Molina, con relación a los cuales la instrucción no ha encuadrado mérito para procesarlos.

Por tanto la Sala en lo Penal;

Confirma en lo principal el auto recurrido y modifica en cuanto a la calificación legal del delito, declarando que se procesa á Juan Angel Vizgarra ó Montero por existir indicios suficientes de ser autor del delito previsto en el art. 105 del Cód. Penal.

Cópiese, notifíquese y baje.

Puló, Gudíño—Ante mí Angel Neo.

CAUSA:—Raymundo Ybáñez por homicidio a Juan Gallardo.

Salta, Abril 7 de 1931.

VISTOS los recursos de nulidad y apelación interpuestos a fs. 35 por el letrado defensor del procesado Raymundo Ybáñez contra el auto de fs. 33

CONSIDERANDO:

En cuanto a la nulidad: Que el auto venido en grado cumple en su estructura y substanciación, con todas las formalidades legales propias de las de su estilo, resultando así improcedente la nulidad interpuesta.

En cuanto a la apelación: Que si

bien la calificación genérica de «homicidio» formulado por el auto de prision preventiva de fs. 26, no precisa con exactitud la categoría especial del homicidio que se imputa al procesado, las constancias de autos permiten considerarlo, «prima-facie», comprendido en la de homicidio simple, delito previsto y penado en el art. 79 en el Cód. Penal.

Que para la procedencia del sobreseimiento definitivo, es decir, para la cesación de los procedimientos, se requiere la concurrencia de cualesquiera de las tres circunstancias enumeradas en el art. 390 del Cód. de Procedimientos Criminales, este es: a) la evidencia de que el delito no ha sido perpetrado; b) que el hecho probado no constituye delito y c) que aparezcan de un modo indudable exentos de responsabilidad criminal los procesados.

Que con la partida de defunción de fs. 3; declaración indagatoria prestada por el acusado ante la Comisaría instructora corriente a fs. 17-18 y ratificada a fs. 25; y declaraciones de los testigos Felipe A. Tolaba, fs. 6 vta. —7 y Manuel Vicente Pereyra fs. 13 vta.—14, aparece suficientemente comprobado que el día 22 de Noviembre del año mil novecientos treinta en el lugar El Bordo, jurisdicción del Departamento de Rosario de la Frontera, fué muerto a balazos Juan Gallardo por Raymundo Ybáñez.

Que el hecho mencionado constituye el delito de homicidio simple, previsto y penado en el art. 79 del Código Penal.

Que la responsabilidad del procesado como autor del hecho que se le imputa aparece, así mismo; comprobada por su confesión, formulada en su declaración indagatoria, y con la declaración de los testigos presenciales Tolaba y Manuel Vicente Pereyra.

Que la exención de responsabilidad criminal de Ybáñez a mérito de la legítima defensa alegada, no apa-

rece demostrada en manera alguna, en estos autos, pues los numerosos testigos que deponen en el sumario, nada vieron y nada recuerdan por el avanzado estado de ebriedad en que se encontraban, salvo, únicamente, las manifestaciones de los mencionados testigos Felipe A. Tolaba y Manuel Vicente Pereyra.

Que el testigo Tolaba, a cargo del negocio donde ocurrió el hecho, declara que el padre de Gallardo tuvo una discusión con Buenaventura Serrano, interviniendo para apaciguarlos Raymundo Ybáñez, cuñado de éste, lo que disgustó a Juan Gallardo, logrando los circunstantes evitar la incidencia y reconciliarlos y obteniendo el dicente que Gallardo le entregara un cuchillo que guardó en el interior del negocio; que a Ybáñez no le pidió el revólver porque no sabía que estaba armado.

Que el declarante entró, después, al negocio para atender a un menor que solicitaba se le vendiera yerba y azúcar, en cuyas circunstancias oyó voces de disgusto que procedía de donde se encontraban bebiendo las personas precedentemente nombradas y que al acercarse llegó en circunstancias en que Ybáñez, con un revólver en la mano, disparaba contra Juan Gallardo, quién cayó en tierra. Que ante lo imprevisto del caso nadie pudo evitar la agresión, dándose el matador a la fuga.

Que el testigo Manuel Vicente Pereyra, declara que el día 22 de Noviembre del año ppdo. se encontraba bebiendo en el negocio de su padre Mauro Pereyra, los sujetos Raymundo Ybáñez, Buenaventura Serrano, Octavio Luna, Fermín Gallardo, Teodoro Samana, Arcadio Paz y Juan Gallardo y que mas o menos a las catorce horas de ese día Fermín Gallardo golpeó a Buenaventura Serrano a raíz de un disgusto que tuvieron; que interviene en la incidencia Juan Gallardo, quién, atacó a golpes de puño a Raymundo Ybáñez, el que de inmenso, desenfundó su revólver ha-

ciendo disparos contra Gallardo, sin que los circunstantes pudieran evitar la agresión. Agrega que inmediatamente Ybáñez se dió a la fuga.

Que los testimonios precedentes son contradictorios en cuanto para el testigo Tolaba la incidencia entre Juan Gallardo é Ybáñez se habría producido a raíz de la intervención de éste en la pelea sostenida entre el padre de la víctima con Buenaventura Serrano, cuñado del victimario, incidencia que no tuvo trascendencias debido a la intervención de los circunstantes que lograron apaciguar los ánimos, mientras que para el testigo Pereyra en circunstancias que peleaban Fermín Gallardo con Buenaventura Serrano, la víctima atacó a golpes de puño a Raymundo Ybáñez, quién repelió a balazos la agresión.

Que debe admitirse como sincera y verídica la declaración del testigo Felipe A. Tolaba desde que en su testimonio atribuye un móvil lógico a las acciones de Juan Gallardo y Raymundo Ybáñez; ambos intervienen en la incidencia entre Fermín Gallardo y Buenaventura Serrano en defensa de sus padres y cuñado respectivamente, mientras que en el testimonio del testigo Pereyra, la víctima resultaría agrediendo inmotivadamente al victimario.

Que por otra parte la declaración del testigo Pereyra aparece, así mismo, desmentida por el propio inculgado quién en su indagatoria manifiesta que su intervención conciliadora en la incidencia entre Fermín Gallardo y Serrano determinó una reacción en su contra de parte de Juan Gallardo evitando los circunstantes que éste cumpliera su propósito.

Que demostrado en el análisis de las declaraciones antedichas que los tiros que Ybáñez deserrajó contra Gallardo, no fueron en reacción llevada por éste contra aquél, a raíz de la incidencia habida entre Fermín Gallardo y Buenaventura Serrano, corresponde determinar si ella fué la resu-

tante de una agresión posterior como lo afirma y si el medio empleado por el procesado fuè racionalmente necesario para repelerla.

Que la posterior agresión de parte de Juan Gallardo, alegada por Ybáñez, no resulta acreditada con ninguna de las declaraciones del sumario existiendo a éste respecto, solamente, la afirmación del inculpado formulada en su declaración indagatoria, insuficiente, de cuyo, como prueba de descargo.

Que aún en el supuesto de admitirse como exacta la existencia de una posterior agresión de la víctima al procesado, cabe advertir que éste no podía desconocer que Juan Gallardo carecía de armas, desde que fuè desarmado a raíz de la primera incidencia, por el testigo y dueño de la casa Felipe A. Tolaba, circunstancias que colocaba a aquèl en una evidente inferioridad de condiciones con relación a Ybáñez, y hubiera sido bastante, a juicio de esta Sala que éste egrimiera su revólver, para contener cualquier impulso agresivo de la víctima, dada la natural influencia evativa de un arma de fuego contra quien carece de ella.

Que en autos no está comprobado que existiera entre víctima y victimario una diferencia tal de fuerza física que justificara el empleo inmediato del revólver como medio defensivo para repeler la supuesta agresión ni se ha demostrado que Ybáñez intentara contener previamente, con su arma a Gallardo ni que le advirtiera de que la persistencia en sus designios lo determinarían a dispararla;

Por lo tanto;

La Sala en lo Penal de la Exma. Corte de Justicia:

DESESTIMA la nulidad y confirma, con costas el auto recurrido.

Cópiese, notifíquese y bajen.

Puló, Gudíño—Ante mí Angel Neo.

CAUSA:—Gorgorio Medina solicita libertad condicional.

Salta, Abril 8 de 1931.

Vista: la solicitud de libertad condicional formulada por el penado Gorgorio Medina fundada en el art. 13 del Cód. Penal y

CONSIDERANDO:

Que el recurrente ha sido condenado a sufrir la pena de tres años de prisión por sentencia del Sr. Juez de 1ª Instancia y 2º Nominación en lo Penal Dr. Ricardo E. Araoz de fecha 16 de Diciembre de 1930

Que lleva hasta la fecha mas de ocho meses de la pena impuesta (cómputo de pena de fs. 71), habiendo observado buena conducta y cumplido con los reglamentos carcelarios (informes de fs. 70 vta.), circunstancias que lo colocan dentro de los términos del art. 13 citado.

Por ello, esta Sala en lo Penal.

RESUELVE: Conceder la libertad al penado Gorgorio Medina, bajo las siguientes condiciones que regirán hasta el día 27 de Julio del año mil novecientos treinta y tres, con el apercibimiento dispuesto en el art. 15 del Cód. Penal:

1º.—Residir en esta ciudad de donde no podrá ausentarse por más de cinco días sin conocimiento prévio del Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Penal.

2º.—Concurrir cada primero de mes a la Secretaria del referido Juzgado debiendo el Secretario, en caso de incomparencia, dar cuenta a esta Sala.

3º.—Adoptar dentro del término de veinte días, oficio, industria, arte o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencias.

4º.—Abstenerse de portar armas de cualquier clase, de ingerir bebidas alcohólicas y de cometer nuevos delitos.

5º.—Someterse al Patronato del Sr. Defensor Oficial, quien deberá a)—Obtener informe sobre la conducta del mismo, a) Procurar que el liberado obtenga trabajo en el término fijado. b) Obtener informes sobre la conducta del mismo y tratar que los empleadores de aquèl le den cuenta cuando abandone su trabajo; y (c) Tomar to-

das las medidas que considere necesarias para obtener la corrección moral y material del liberado.

Notifíquese al Patrono, al penado que deberá constituir domicilio en este acto, oficiese a los señores Juez en lo Penal y Jefe de Policía con transcripción de la parte dispositiva de este auto; tómese razón cópiese, notifíquese y baje para su anotación y cumplimiento.—Sítese al señor Fiscal. PULÓ—GUDIÑO—Ante mí: Angel Neo.

CAUSA.—Ejecutivo.—Ramón Vivas vs. Juan Mónico

Salta, Abril 8 de 1931

Vistos Los autos ejecutivos seguidos por Ramón Vivas contra Juan Mónico en apelación de la sentencia de fs. 56 a 57 y fecha 25 de Febrero del corriente año, que, rechazando la excepción de nulidad de la intimación manda llevar adelante la ejecución con costas.

CONSIDERANDO:

I Que, limitándose el recurrente a mantener el recurso de apelación debe tenerse por implícitamente desistido el de nulidad.

II Que el ejecutado, no puede oponer excepciones correspondientes a una intimación de pago deficientemente formulada, si, como ocurre en la especie sub-lite, la exigencia de la intimación ha sido renunciada al contraer la obligación; pues la propia renuncia, equivaliendo a tener por hecha la intimación, le impide exigir una nueva intimación en forma.

III Que, así como el ejecutado debe cargar correspondientes a una excepción indebidamente opuesta, el ejecutante debe cargar con las correspondientes a una diligencia practicada por él innecesariamente.

Por ello,

LA SALA EN LO CIVIL DE LA CORTE DE JUSTICIA:

Confirma en lo principal la sentencia recurrida, y la Revoca en cuanto condena en costas al ejecuta-

do, debiendo éstos pagarse por su orden.—Cópiese, repóngase, notifíquese y baje.—David Saravia, Francisco F. Sosa.—Humberto Cánepa.—Secretario Letrado: Mario Saravia.

CAUSA.—Contra Nemesio ó Demesio Vilte por circulador de obligaciones falsas de la Provincia.

En la ciudad de Salta, a los nueve días del mes de Abril del año 1931; reunidos en su Salón de Acuerdos los sres. Ministros de la Exma. Corte de Justicia, Sala en lo Penal, doctores David E. Gulíño y Cristian Puló, a objeto de conocer en la apelación interpuesta por el procesado Nemesio ó Demesio Vilte contra la sentenciá de fecha quince de Noviembre del año 1930 en la causa que se le sigue por circulador de obligaciones falsas de la Provincia, fueron planteadas las siguientes cuestiones:

I°—Está probado el hecho imputado al procesado?

II°—Lo está de que Nemesio ó Demesio Vilte sea su autor?

III°—En caso afirmativo: Es equitativa la pena impuesta?

Practicado el sorteo de Ley de conformidad al acta precedente dió el siguiente resultado: Dres. Puló, Gudíño.

A la primera cuestión el Dr. Puló, dijo:—La circulación de obligaciones falsas de la Provincia, hecho producido en los primeros días del mes de Enero del año ppdo., se encuentra comprobado con las declaraciones de los testigos Desiderio Guantay—fs. 3—4, Carlos Miraza fs. 20, Jerardo Guerra fs. 22, Clemente Tastaca, fs. 27, declaración indagatoria del procesado corriente a fs. 5—7, y reiterada a fs. 37—38 y 41 y con las obligaciones agregadas a fs. 8, 16 y 19. La falsedad de estas últimas resulta acreditada con el simple exámen visual de los mismos, como la consigna el inferior en la sentencia recurrida, y no ha sido, por otra parte, negado

por la defensa.

Voto en consecuencia por la afirmativa.

El Dr. Gudiño adhiere a la primera cuestión.

A la segunda cuestión el Dr. Puló, dijo.

La responsabilidad del procesado como circulador de obligaciones falsas de la Provincia se encuentra comprobada con la declaración del testigo Guantay que manifiesta fs. 3—4, que Vilte le hizo entrega de un bono de veinte pesos en pago de tres cervezas que consumió y que al ir a cambiar el bono se lo rechazaron por falso; el testigo Carlos Miraza declara, fs. 20 que el día cinco de Enero del año ppdo. en circunstancias que atendía su negocio llegó el sujeto Nemesio Vilte, quien pidió un litro de chicha y medio litro de vino pagándolo, con un bono de veinte pesos que resultó, así mismo, falso; Gerardo Guerra declara fs. 22, que el día cinco de Enero de 1931, en circunstancias que atendía su negocio, denominado «Recreo», llegó el sujeto Nemesio Vilte y le pidió una botella de cerveza y veinte centavos de fiambres abonando el gasto con un bono de veinte pesos que resultó falso y fué secuestrado por la Instrucción policial.

El procesado en la declaración indagatoria prestada ante la policía se reconoce autor del hecho que se le imputa agregando que recibió los bonos para circularlos de manos de Carlos Acevedo, (Con cargo de hacerle entrega) procesado por el delito de falsificación de los mismos con cargo de hacerle entrega de diez pesos moneda nacional por cada bono falso que lograrse cambiar.

Al declarar ante el Juzgado, Vilte rectifica parcialmente su declaración sosteniendo que circuló los bonos en la creencia de que eran auténticos. De la prueba testimonial arrojada a este proceso, se desprende claramente que esta última declaración del procesado no es sincera pues es-

tá probado con la declaración de Desiderio Guantay y Clemente Tastaca que el procesado, teniendo billetes menores en su poder, pretendió pagar una consumación de tres botellas de cerveza con un bono de veinte pesos, lo que demuestra, su interés en cambiarlos.

Las declaraciones de los testigos Carlos Miraza y Guerra acentúan esta comprobación en cuanto prueban que el día cinco de Enero el procesado a horas diez y nueve y treinta convirtió un bono falso en el negocio del primero, haciendo lo mismo una hora después en el negocio del segundo.

Voto por la afirmativa.—El Dr. Gudiño, adhiere a la segunda cuestión.

A la tercera cuestión el Dr. Puló, dijo.

Pienso que la pena impuesta al procesado es equitativa, tanto mas si se tiene en cuenta que la mínima establecida en el art. 282 del Cód. Penal concordado con el art. 285 del mismo

Por ello, voto por la afirmativa.

A la tercera cuestión el Dr. Gudiño, dijo:

El Sr. Fiscal en su requisitoria, de fs. 45 a 47 vta., pide para el reo el minimun de la pena establecida en los arts. 282, 285, del Cód. Penal ó sea tres años de prisión y costas, y el Defensor del procesado, encontrando justa la acusación fiscal se conforma con ello y pide su aplicación. Como se ve no hay diversidad de criterio entre la acusación y la defensa en cuanto a la penalidad, por que los caracteres del delito comprobado y de que resulta autor el procesado Nemesio ó Demesio Vilte, le hacen encuadrar en las disposiciones contenidas en los arts. 282, y 285 del Cód. Penal.

Voto por la afirmativa.

Con lo que terminó la audiencia quedando acordada la siguiente resolución.

Salta, Abril 9 de 1931—De conformidad a la votación que instruye el

acuerdo que precede se confirma la sentencia apelada de fecha 15 de Noviembre de 1930, de fs. 52 á 54, que condena a Nemesio o Demesio Vilte a sufrir la pena de tres años de prisión y accesorios de Ley.

Cópiese, notifíquese y baje.

C. Puló, D. E. Gudiño.—Ante mí: Angel Neo.

CAUSA:—Contra Cresencio Salazar y Urbano Arroyo ó Loza por homicidio y robo a Carlos Fernández Prieto.

En la ciudad de Salta, a los once días del mes de Abril de 1931, reunidos en su Salon de Acuerdo, los Sres. Ministros de la Exma. Corte de Justicia, Sala en lo Penal David E. Gudiño y Cristian Puló, a objeto de conocer en la apelación interpuesta por Cresencio Salazar (a) El Pollo ó Macho Blanco y Urbano Arroyo Loza, Loza ó Arroyo contra la sentencia de fecha diez de Abril del año 1930 en el proceso que se les sigue por homicidio y robo a Carlos Fernández Prieto, fueron planteadas las siguientes cuestiones:

1ª.—Está probado el hecho imputado a los procesados?

2ª.—Lo está de que Cresencio Salazar y Urbano Arroyo ó Loza, sean sus autores?

3ª.—En caso afirmativa: Es equitativa la pena impuesta a los mismos?

Practicado el sorteo de Ley de conformidad a el acta precedente dió el siguiente resultado: doctores Puló Gudiño.

A la primera cuestión el Dr. Puló, dijo:

El hecho imputado a los procesados se encuentra plenamente comprobado con la partida de defunción de fs. 6, peritaje de fs. 5 vta, declaración de Aurora Torino, fs. 2 vta. y 3, y declaraciones indagatorias de los procesados corrientes a fs. 45—53 69 y 79, respectivamente.

Voto, en consecuencia por la afirmativa.

El Dr. Gudiño adhiere al voto precedente

A la segunda cuestión el Dr. Puló, dijo:—La responsabilidad criminal de los procesados se encuentra plenamente probado, a mi juicio, con la confesión de los mismos formulada en sus declaraciones y con las manifestaciones de los testigos del sumario, las que informan sobre diversas circunstancias estrechamente vinculadas a la comisión del hecho criminal y que corroboran, a su vez, la prueba de la responsabilidad de los acusados.

Urbano Arroyo Loza ó Urbano Loza, confiesa, en la indagatoria de fs. 45—53, que entre el ocho ó nueve del mes de Setiembre de mil novecientos veinteocho encontrándose en «El pié de la Cuesta», Departamento de Santa Bárbara, Provincia de Jujuy, recibió la visita de Cresencio Salazar (a) El Pollo, quién montaba un caballo colorado cari-blanco, grande.

Que entablaba conversación Salazar le manifestó que andaba buscando mulas para comprar y que un tal Palavecino le había prestado el caballo que montaba y le había informado que en «El Viscacheral», Departamento de Anta, Provincia de Salta, vivía un gallego que se llamaba Carlos Fernández Prieto y al que se podía robar fácilmente. Que Salazar reclamó la colaboración de Arroyo Loza para robar a Fernández, manifestándole que «Lo ataría al viejo y si era necesario lo mataría». Que el declarante se negó terminantemente a acompañar a Salazar en su empresa y que al día siguiente salieron en dirección a «El Real de los Toros», pidiéndole Salazar que lo acompañara hasta el «Bordo», a casa de un tal Velarde, adonde iría a comprar unas mulas, recomendándole le nombrara Zenón Pereyra Arroyo y le hiciera pasar por su pariente, lo que así hizo.

Después de pasar dos noches en una casa de su concubina Pastora

Contreras de Carranza ultimando preparativos y bebiendo en compañía de Salazar y Silverio Rios, se pone en marcha juntamente con estos llevando un cuchillo de propiedad de su concubina y montando un caballo de la misma. De Rios, se esperaron antes de llegar al lugar denominado «Palma Soña», diciéndole que se dirigían a Jujuy, a donde se dirigieron y al llegar al lugar «Arroyo del Medio» volvieron tomando rumbo hacia la Frontera de Salta. Que procurando excusar su presencia en el monte, llegan, al anochecer del día del hecho a «El Vizcacheral», acercándose Salazar hasta en el negocio de Fernández a comprar pan y sardinas pero con el verdadero propósito de tomar información del terreno donde pensaban actuar mas tarde. Luego toman por el camino del Bordo y se acercan a la casa de algunos vecinos a preguntar por Brigido Velarde, pues perseguían el doble objetivo de tratar de formar una banda de cinco ó seis personas para asaltar a Fernández y a la vez informarse sobre la gente que habitaba en la casa de este y sus alrededores. Que habiendo sido informados de que Velarde no se encontraba por allí y que solo acompañaban a Fernández una anciana y una chica, resolvieron volver hacia el «Vizcacheral» a dar el golpe, pidiéndole Salazar en el camino, le hiciera entrega del cuchillo que llevaba, haciéndolo así el declarante. Que llegando a la casa de Fernández, Salazar llamó solicitando se le despachara, rehusándose Fernández ha hacerlo por ser muy tarde, que Salazar insistió diciéndole que eran viajeros, accediendo entonces Fernández a venderles.

Que abierto el negocio Salazar entró en él y despues de adquirir algunas mercaderías, llamó al declarante, que se encontraba afuera al lado de los caballos. Que una vez que Fernández salió del mostrador en busca de coca, Salazar le encaró y le dijo: Ríndase! y como Fernán-

dez hiciera además de sacar armas, se trabaron en lucha, que entonces la chica se armó de un cuchillo, pero el declarante la atropelló y logró desarmarla; que las mujeres entraron disparando a la habitación donde dormían seguidos por el declarante, oyendo en estas circunstancias que Fernández gritaba: «traigan el otro revólver» y vió que Salazar y Fernández salían luchando hacia afuera; que los perros ladraban y atropellaban insistentemente y que el declarante sujetaba a las mujeres y las amenazaban con atarlas y que en la lucha un perro le sacó el sombrero que reconoce ser el mismo que en este acto se le pone de manifiesto es el que se encontró en el lugar del hecho.

Que al rato oyó que Salazar le gritaba: «Sargento, suba y vamos» y que el declarante dejando a las mujeres salió corriendo hacia su caballo pero los perros se lo impidieron, que cuando por fin consiguió montar, Salazar ya había disparado en su caballo, pero que el declarante lo alcanzó al corto trecho, internándose en el monte; que al llegar al puesto «El Tunal» recién habló Salazar para decirle «ya lo he jodido y estamos a salvo»; le he metido como cinco puñaladas, etc.; que el declarante reprochó a Salazar haber llevado las cosas hasta ese extremo pero que éste le contestó que Fernández le había errado un tiro. Después de anotar que regresaron por el mismo camino y referir una serie de circunstancias sin mayor importancia, agrega que al llegar a Retiro, Salazar le hizo entrega de la cantidad de nueve pesos con noventa centavos que correspondía a la mitad del dinero que había retirado del cajón del mostrador de la casa de Fernández; que en la Esperanza se separaron tomando Salazar rumbo al Yuto y el declarante siguió hasta Jujuy. Hace presente que su estado mental en el momento de la comisión del hecho era algo anormal pues había bebido alcohol para darse ánimo, mientras

que el estado mental de Salazar era completamente normal.

Cresencio Salazár (a) El Pollo ó Macho Blanco en su declaración indagatoria corriente a fs. 69 79 coincide con Urbano Arroyo ó Loza en todas las circunstancias anteriores del hecho tales como el camino seguido, el arma empleada, su vestimenta y característica de los caballos que montaban, pero difiere fundamentalmente en cuanto a la preparación del delito se refiere pues lo atribuye exclusivamente a Urbano Arroyo ó Loza reconociendo, es así, que fué el autor material de la muerte de Fernández y del robo del dinero de propiedad de éste que contenía el cajón del mostrador del negocio.

Ahora bien, las confesiones de los acusados son corroboradas en las diversas circunstancias expuestas en sus declaraciones indagatorias con las manifestaciones de los testigos del sumario.

Así, la relación formulada por Salazar y Arroyo Loza con respecto al asalto y robo perpetrado en casa de Fernández es coincidente en todas sus partes con la declaración prestada en fs. 2 vta. y 3 por Aurora Torino, concubina de la víctima. La indumentaria de los procesados en la noche del hecho y las características de los caballos que montaban coinciden con los asignados a los mismos por los testigos Argentino Fernández— fs. 3 vta. 4; Atanasio Romero fs. 23 26; Silverio Rios fs. 28 vta. y 30; y Pastora Contrera de Carranza fs. 31 34 reconociendo ésta última ser de su propiedad el cuchillo que ha servido de instrumento del delito y habérselo prestrado a su concubino Urbano Arroyo Loza.

Considero que las confesiones de los procesados reúnen todos los requisitos exigidos en el art. 274 del Cód. de Proc. Criminal concurriendo además los del art. 264 del mismo Cód., por lo que pienso que debe tenerse como prueba plena de su

responsabilidad criminal en el hecho que se les imputa.

Por todo ello, voto por la afirmativa a la segunda cuestión propuesta.

El Dr. Gudiño adhiere al voto precedente.

A la tercera cuestión, el Dr. Puló dijo.

Esta Sala en lo Penal ha establecido ya en la sentencia dictada el día 25 de Noviembre de 1930, en la causa seguida a Geroncio Salinas por homicidio a Clodoveo Sanchez, que la querrela carece de derecho para requerir la aplicación de pena, en el juicio criminal, desde que su interés jurídico queda a salvo con la condena que le asegura la reparación del daño patrimonial y del afectivo ó moral.

La acción penal pertenece a la sociedad y se ejerce en su nombre. Pertenece a la sociedad porque es ejercitada en el interés común de todos sus miembros y tiende a defenderla, a protegerla, a estrechar los vínculos que la unen y a rechazar— como dice Faustín Helielos actos que la ataquen, por que ella tiene por misión la de hacer revivir el derecho que es el fundamento de la vida social.

Admitir que la querrela, es decir, la acción privada de la parte afectada, pudiera requerir la penalidad, importaría la oficialización de «la vendetta» individual, resabio bárbaro, felizmente desterrado, hoy en día, de los procedimientos criminales.

Por aplicación de su propia jurisprudencia en el caso recordado y por no haber mediado apelación Fiscal, pienso que esta Sala en lo Penal no debe, ni puede legalmente, revisar la calificación legal del delito y penalidad impuesta a los procesados, en el sentido de agravar esa responsabilidad.

Este proceso, fuera de toda duda nos ha puesto en presencia de un delincuente avezado y reiterante, de una peligrosidad efectiva como lo es Cresencio Salazar y de otro delincuen-

te de pésimos antecedentes policiales, de peligrosidad incipiente como Urbano Arroyo Loza, ambos de una larga historia criminal. De haber mediado apelación fiscal y de haber sido posible realizar un libre análisis de las múltiples circunstancias agravantes que concurren en el caso de autos, creo, sin duda alguna, que la penalidad que hubiera correspondido a Salazar frío y cobarde ejecutor material del homicidio y robo a Carlos Fernández Prieto—es la establecida en el Inc. 3° del art. 80 del Cód. Penal. Pero no siendo legalmente posible aumentar la penalidad impuesta en la sentencia en recurso y no siendo, por otra parte, idéntica la responsabilidad de Salazar y Arroyo Loza en la comisión del hecho, ni los antecedentes criminales de uno y otro, creo que es de equidad reducir la penalidad impuesta a éste último en atención a esas mismas circunstancias.

Por ello, voto por la confirmatoria de la sentencia en cuanto condena a Cresencio Salazar (a) El Pollo ó Macho Blanco a sufrir 25 años de reclusión, accesorios de Ley y costas y por que se le modifique en cuanto a la pena impuesta a Urbano Arroyo Loza ó Urbano Loza reduciéndola a 21 año de reclusión, accesorios de Ley y costas.

A la tercera cuestión el Dr. Gudifión dijo:

Si examinamos minuciosamente la situación legal de los procesados, autores del homicidio y robo a Carlos Fernández Prieto tenemos que convenir con que ella no es igual; pues mientras Cresencio Salazar trama el delito, lo madura y delibera y lo ejecuta, su compañero Urbano Arroyo Loza, si bien no puede desconocerse que coopera a la realización del delito, no lo hace en la misma medida, ni en cuanto a la concepción, ni en cuanto a la ejecución. Es indudable que el delincuente que concibe el plan del hecho delictuoso; que toma todas las medidas para que no falle; que visita el lugar para ver

la defenza o resistencia que la víctima puede ofrecer; que ejecuta el delito alevosamente, a altas horas de la noche, en un paraje solitario, dando muerte a una persona y le roba, demuestra una peligrosidad excesiva, amén de que tal delito viene a caer netamente dentro de las prescripciones contenidas en el art. 80 Inciso tercero del Cód. Penal; pero, esta Exma. Sala siguiendo la jurisprudencia sentada por el Superior Tribunal y por la mayoría de los tribunales de la República, ha establecido de una manera uniforme y constante el principio de que no puede modificar una sentencia con la cual se ha conformado el fiscal, no apelándola, cuando la modificación ha de empeorar la situación del reo.

Bien es cierto que en este proceso ha apelado el querellante particular solicitando para este procesado Cresencio Salazar una pena mayor que la impuesta por el a-quo; pero también esta Exma. Sala y, antes que ella, el Superior Tribunal han establecido que al acusador particular no le interesa el quantum de la pena que se imponga al reo de un delito; debe vastar la condena sola que haga viable la indemnización del daño.

Luego, no puede aceptarse esta apelación como una exigencia social, sino mas bien como el ejercicio de la venganza desterrada ya de todas las legislaciones modernas.

En cuanto a Urbano Arroyo Loza, conceptúo que su situación como ya lo dijo antes—es distinta a la de Salazar; Loza si bien es cierto que ha cooperado a la comisión del delito no lo ha hecho en la misma medida; el ha aceptado un plan ya madurado por Salazar y ha prestado una asistencia, no por cierto de las consecuencias de sus procesados. En consecuencia, voto por la confirmatoria de la sentencia, en cuanto condena a Cresencio Salazar a la pena de 25 años de reclusión, accesorios legales y costas y por que se modifique la misma rebajándose la pena impuesta.

a Urbano Arroyo Loza a 21 año de reclusión, accesorios legales y costas.

Con lo que terminó la audiencia quedando acordada la siguiente resolución:

Salta, Abril 11 de 1931.

De conformidad a la votación que instruye el Acuerdo que precede se confirma la sentencia recurrida en cuanto condena a Cresencio Salazar (a) El Pollo ó Macho Blanco a sufrir 25 años de reclusión, accesorios de Ley y costas y la modifica en cuanto a la pena impuesta a Urbano Arroyo Loza ó Loza reduciéndola a 21 año de reclusión, accesorios de Ley y costas.

Cópiese, notifíquese y baje.

C. Puló.—D. E. Gudiño.—Ante mí:
Angel Neo:

CAUSA.—Contra Julio Pizetti, Ricardo Parisi, Apolinar Cardozo, y Modesto Arroyo; el 2º cómplice de defraudación y falsificación de firma; el 3º cómplice de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y el último por defraudación a la Municipalidad de Orán.

Salta, Abril 13 de 1931.

V. VISTOS:—Los recursos de apelación y nulidad interpuesto a fs. 67 por el letrado defensor del procesado Ricardo Parisi contra el auto de prisión preventiva corriente a fs. 67.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la nulidad: que el título segundo de la sección segunda del libro cuarto del Código de Prosed. criminal establece las normas a que deberá ajustarse la instrucción criminal en las querellas y denuncias por falsificación de documentos públicos y privados, normas que aparecen omitidas en este proceso, en cuanto a la supuesta falsificación de la firma de Modesto Arroyo que suscribe la petición corriente a fs. 6 de estos autos; Que a los inculpados Pizetti y Pa-

risi no se les ha exhibido, en el acto de prestar sus declaraciones indagatorias, la factura argüida de falsa art. 566, ni se ha levantado el acta prescripta en el art. 558, ni se ha practicado el cortejo de letra-art. 561-, elemento de juicio indispensable para arrimar a éste proceso la semi-plena prueba de la existencia del delito de falsificación de firma impuesta a los procesados;

Que las comisiones consignadas precedentemente vician de nulidad el auto recurrido en cuanto convierte en prisión preventiva la detención del procesado Parisi por el supuesto delito de complicidad en la falsificación de firma a Modesto Arroyo;

En cuanto a recurso de apelación: que se imputa a Julio Pizetti, por el comisionado municipal de Orán—nota de fs. 7., la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas-art. 265 del Código Penal-, defraudación de caudales públicos-art. 261 y falsificación de documentos-art. 292 del Código Penal;

Que se procesa a Ricardo Parisi co-participación en los delitos de defraudación a la Municipalidad de Orán y en la falsificación de la firma de Modesto Arroyo, que contiene la factura de fs. 6;

Que con respecto a éste último delito, esta Sala en lo Penal se ha pronunciado precedentemente al conocer en el recurso de nulidad interpuesto, por lo que corresponde considerar únicamente, el auto recurrido en cuanto al delito de defraudación, la procedencia ó improcedencia de dicha calificación y a la responsabilidad que se atribuye al recurrente en la comisión del mismo;

Que la defraudación de doscientos treinta y ocho pesos con quince centavos a la Municipalidad de Orán—recibos de fs. 5 y factura de fs. 6, se habría consumado, la nota acusación de fs. 7 por medio de una falsa operación de compra-venta tramada por el ex-presidente de aquella comuna.

don Julio Pizetti y por lo cual su capatáz Modesto Arroyo aparecía enajenando a la Municipalidad siete vigas de madera, operación que se simuló a fin de que Pizetti sustrajera del tesoro comunal la cantidad de doscientos treinta y ocho pesos con quince centavos a que ascendía dicha operación;

Que el procesado Parisi confiesa, en su declaración indagatoria corriente a fs. 3133 que Pizetti le hizo entrega en el mes de Setiembre de 1930, de la factura corriente a fs. 6 a fin de que, como comisario municipal, le pusiera el *visto bueno* certificando la recepción de la madera, cosa que hizo, *aunque le constaba que la operación no se había verificado.*

Que Modesto Arroyo declara a fs. 8 y 9 que jamás vendió a la Municipalidad de Orán maderas en vigas, ni en tallos, ni en tablones, agregando que la firma puesta al pie de la factura de fs. 6 y que dice «Modesto Arroyo» no le pertenece y ha sido falsificada. Manifiesta, así mismo, que el recibo agregado a fs. 5 y que corresponde a la factura de fs. 6 lo firmó de complacencia y por sugestiones del Tesorero Municipal don Leopoldo Zigarán en presencia de Pizetti y del secretario Borhoquez.

Que Julio Pizetti, en su declaración indagatoria de fs. 27-31, manifiesta que entregó la madera vendida por su capatáz Modesto Arroyo a la Municipalidad, al comisario municipal don Ricardo Parisi en la playa de la estación.—Que la operación la realizó por cuenta y orden de Arroyo y la madera correspondía a su regalo que le hizo a su nombrado capatáz.

Que percibió el importe de la venta por orden de Arroyo, suscribiendo éste el correspondiente recibo.—Que en cuanto a la factura, sospecha que la firma de Arroyo fué falsificada por Parisi por habérselo dicho éste;

Que Modesto Arroyo, en su indagatoria de fs. 37-38, declara que es falso que haya autorizado a Pizetti a vender la madera de su propiedad y

a cobrar el precio de la misma y se ratifica en toda su declaración de fs. 8-9.

Que el careo efectuado entre Arroyo y Pizetti acta de fs. 43, éste último reconoce retener en su poder el importe de venta de maderas que Arroyo aparecía efectuando a la Municipalidad y ofrece hacer entrega a éste de esa cantidad sino retira la madera vendida.

Que si bien del exámen de las declaraciones anteriores resulta, «prima facie», comprobado que el comisario municipal de Orán Ricardo Parisi visó y dió por recibidas las maderas que Arroyo aparecía vendiendo a la Municipalidad de Orán, acto que indudablemente contribuyó a completar la aparente legalidad de la compra-venta simulada para sustraer al Tesoro Municipal la cantidad de doscientos treinta y ocho pesos con quince centavos, está, así mismo; suficientemente acreditado que el recurrente no participó de los efectos de esa defraudación, ni aparecen indicios de que tuviera interés alguno en la operación dolosa que se realizó;

Que la visación de la factura de fs. 6 por parte de Ricardo Parisi-Comisario Municipal y por tanto dependiente de Julio Pizetti, Presidente de la Municipalidad, Ley Orgánica de Municipalidades, Título IV, debe, «prima-facie», interpretarse, a juicio de esta Sala, más que como un acto de complicidad, como una natural subordinación del inferior hacia el superior que le llevó a encubrir un acto delictuoso realizado por éste;

Que debe tenerse en cuenta que la ayuda ó colaboración prestada por Parisi a Pizetti fué, en cierto modo, posterior a la ejecución del hecho y sin convenio prévio lo que lo coloca dentro de los preceptos que castigan al encubrimiento, de acuerdo al criterio señalado en la Exposición de Motivos de nuestro Cód. Penal, Pág. 167;

Que por lo demás, cabe advertir que la complicidad es relativa a otro

u otros, es decir, a uno o varios delincuentes, porque, como lo define Von Litz, T. III, Pág. 89, «cómplicitad es el auxilio doloso prestado a otro en el crimen ó delito intencionalmente cometido por él».

Que siendo ello así no habiéndose indagado en la instrucción Judicial a Julio Pizetti, ni dictado ninguna providencia tendiente a definir la situación de éste dentro del proceso, no es admisible que ella se concrete contra quienes están sindicados de complicidad con el acusado como autor principal.

Por tanto, la Sala en lo Penal de la Corte de Justicia: Anula el auto recurrido en cuanto convierte en prisión preventiva la detención del procesado por el delito de falsificación de firma.

La confirma en lo principal y lo modifica en cuanto a la calificación legal del delito, declarando, en consecuencia, que se procesa a Ricardo Parisi, por encubrimiento de la defraudación cometida en perjuicio de la Municipalidad de Orán.

Llama la atención del señor Juez *a-quo* sobre lo dicho en los considerando de esta Sentencia respecto a la situación del inculcado Julio Pizetti dentro de este proceso.

Cópiese, notifíquese y baje.—Puló Gudiño—Ante mí: Angel Neo.

CAUSA:—Solicitud de conmutación de pena por el penado Belindo Anastacio Cuello.

Salta, Abril 13 de 1931.

El informe requerido por el P. E. de la Provincia en la solicitud de conmutación de pena formulada por el penado Belindo Anastacio Cuello,

• CONSIDERANDO:

Que el derecho de gracia ó sea la facultad de abolir en todo indulto ó en parte conmutación las consecuencias jurídicas de una infracción a la Ley penal, se encuentra hoy en día consagrado universalmente como una

facultad del Ejecutivo tendiente como lo enseña Von-Litz T. III; pág. 398 a satisfacer las exigencias de la equidad frente a las generalizaciones rígidas del derecho, o bien, en la posible imperfección de la Justicia y en que después de dictado su fallo pueden descubrirse circunstancias que antes de él fueron desconocidas y cambiar la gravedad del crimen ó disminuirlo: reconoce en la Justicia un principio de piedad no escrito en las Leyes para quitarles lo que tienen de inexorable ó riguroso Joaquín V. Gonzalez, Manual de la constitución, pág. 559.

Que el indulto y la conmutación de pena son soluciones que atemperan muchas veces la inflexibilidad de las decisiones judiciales los que, por fundarse en normas Jurídicas, no admiten, como lo enseña Gonzalez, ob. cit. pág. 559. graduaciones intermedias entre los castigos, ó no guardan proporción con el delito ejecutado;

Que siendo ello así, deberá considerarse, en cada caso ocurrente, a juicio de esta Sala la equidad de la sanción penal recaída en el penado que solicita los beneficios del indulto ó conmutación de pena, su mayor ó menor peligrosidad en relación con las necesidades racionales de la defensa social, fundamento de la moderna represión.

Que en el caso que motiva este informe Belindo Anastacio Cuello fué condenado por sentencia de fecha 12 de Mayo de 1930, dictada por la Exma. Corte de Justicia en pleno, a sufrir doce años de prisión, accesorios de Ley y costas.

Que en los considerandos de dicha sentencia se destaca la peligrosidad del que se le imputaba, computándose a su favor como atenuante, su corta edad, de 20 años.

Que el corto tiempo de prisión que el penado recurrente lleva cumplido en el establecimiento Penal de la Provincia no permite apreciar su positiva enmienda, habiendo sido objeto, por otra parte, de un proceso por circulación de obligaciones falsas de la

Provincia, proceso que se encuentra pendiente aún de resolución judicial, según lo informa el Sr. Juez de 1ª. Nominación en lo Penal.

Por ello,

La Sala en lo Penal de la Exma. Corte de Justicia:

RESUELVE:

Aconsejar al P. E. no haga lugar a la conmutación de Pena solicitada por el penado Belindo Anastasio Cuello.

Oficiése al Sr. Ministro de Gobierno, y remítasele copia testimoniada de ésta resolución, cópiese y remítase.

C. Puló—D. E. Gudiño.

Ante mí:—Angel Neo.

CAUSA: Contra Pedro Abraham Mamani por hurtos reiterados de ganado.

Salta, Abril 13 de 1931.

Y VISTOS.—Los recursos de apelación y nulidad interpuestos a fs. 87 por don Salomón M. Juárez contra la sentencia de fs. 81 y vta.

Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la nulidad: Que el título XXI del Cód de Procedimientos Criminales legisla sobre la responsabilidad de terceras personas y señala el procedimiento para hacerla efectiva, estableciendo a este respecto el Art. 383 que los jueces podrán decretar embargos de bienes pertenecientes a personas extrañas al delito, siempre que esas personas se encuentren sometidas a la responsabilidad civil de delito, con arreglo a disposiciones legales, y que la parte damnificada la haya solicitado;

Que el Art. 385 del mismo título prescribe, a su vez, que las personas a quienes pertenecieren los bienes embargados o que para librarse del embargo hubieran prestado caución, serán oídas, aún durante el sumario, sobre las excepciones o defensas que alegaren para demostrar su irresponsabilidad, agregando el Art. 386 que «Este incidente, como todas las que

se refieren a los bienes afectados o comprometidos por el embargo, correrá por cuerda separada y los autos que en él se dictaren serán solo apelables en el efecto devolutivo».

Que si bien algunas legislaciones extranjeras como el apartado segundo del Art. 112 del Cód. Penal Español - establecen que: «Se hará la restitución aunque la cosa se encuentre en poder de un tercero y éste la haya adquirido por un medio legal» y algunos tratadistas como Groizard - T II, pág. 618. participan de este criterio y sostiene que la acción por restitución o indemnización debe dirigirla la víctima contra el actual poseedor de la casa o el que la consumió, quién, a su vez, tiene acción por repetición contra el que se la vendió y así sucesivamente hasta llegar al primer adquirente que es, en todo caso, quien cargará con las consecuencias de una posible insolvencia del delincuente, es, fuera de toda duda y aún participando del criterio anteriormente enunciado, que la acción dirigida contra el tercero poseedor de buena fe de los efectos hurtados o robados debe estar revestidas de las más elementales garantías de la defensa en juicio, que es inviolable por imperio de lo dispuesto en los Arts. 18 de la Constitución Nacional y 26 de la Constitución de la Provincia;

Que si de acuerdo las recordadas disposiciones de nuestra Ley de enjuiciamiento criminales, que señalan el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de terceras personas, el embargado debe ser oído y admitirsele sus defensas en las diligencias de embargo, es decir, en simples medidas precautorias, en tanto o mayor razón debe oírse a un tercero, poseedor de efectos hurtados y robados, antes de dictarse una condena en su contra, desde que ella comporta una lesión patrimonial definitiva;

Que en autos don Salomón M. Juárez no ha sido llamado a defenderse, como supuesto tercero responsable, ni se le ha dado vista del escrito de

fs. 79-80, en el que el querellante solicita una ampliación de sentencia condenatoria para el recurrente, omisiones éstas que vician de nulidad los procedimientos;

Que por otra parte no se alcanza la razón por la cual el inferior condena a don Salomón M. Juárez, adquirente intermedio de los bueyes hurtados a don Liborio Castillo, a indemnizar a la víctima y no a Benedicto Soto, primer adquirente, o el actual poseedor de los mismos, desde que en el considerando VII de la sentencia de fs. 73-76 se deja expresa constancia que Juárez vendió, a su vez, los efectos hurtados a Castillo, que adquirió de Benedicto Soto;

Que por lo demás la sentencia de fs. 81 fija arbitrariamente en doscientos seis pesos $\frac{m}{n}$, la cantidad que Juárez debe indemnizar a Castillo, cuando en realidad, y en el supuesto de ser procedente esa indemnización, lo que Juárez debía abonar al damnificado no sería otra cantidad que la diferencia entre el precio de compra; doscientos seis pesos $\frac{m}{n}$, y el precio de venta, suma que determinaría el lucro o la cuantía en que aquel había participado en los efectos del delito.

Por tanto:

La Sala en lo Penal de la Corte de Justicia:

Anula la sentencia de fs. 81 y vta., en la parte que ha sido materia de recurso.

Cópiese, notifíquese y baje.

C. PULO—D. E. GUDIÑO—Ante mí: ANGEL NEO.

CAUSA—Contra Benito Ortíz o Asencio Alvarado por homicidio a Andrés Gimenez.

En la ciudad de Salta a los quince días del mes de Abril del año mil novecientos treinta y uno, reunidos en su salón de Acuerdos los señores Ministros de la Excma. Corte de Justicia Sala en lo Penal, doctores David E. Gudiño y Cristian Puló, a objeto

de conocer en la apelación interpuesta por Benito Ortíz o Asencio Alvarado contra la sentencia de fecha doce de Noviembre del año mil novecientos treinta en la causa que se le sigue por homicidio a Andrés Gimenez, fueron planteadas las siguientes cuestiones:

1^a.— Está probado el hecho imputado al procesado?

2^a.— Lo está de que sea su autor?

3^a.— En caso afirmativo: Es justa la pena impuesta en la sentencia recurrida a Benito Ortíz o Asencio Alvarado?

Practicado el sorteo de Ley de conformidad a el acta precedente, dió el siguiente resultado: Dres. Gudiño y Puló.

A la primera cuestión, el doctor Gudiño, dijo:

El acta corriente a fs. 3 y fs. 4 levantada en «Cuña Muerta», Departamento de Orán, lugar en que se produjo el hecho que motiva este proceso; el informe médico expedido a raíz del hecho, corriente a fs. 47; el secuestro del arma empleada, así como de las capsulas o cartuchos usados y el acta de defunción que corre a fs. 68, comprueban de una manera evidente que Andrés Gimenez falleció a consecuencias de las heridas que recibió, inferidas por el procesado Benito Ortíz o Asencio Alvarado según la propia indagatoria del reo.

En consecuencia, voto por la afirmativa en esta primera cuestión.

El Dr. Puló, adhiere al voto precedente.

A la segunda cuestión el Dr. Gudiño, dijo:

Ninguno de los testigos que depone en este proceso se ha encontrado en el lugar del hecho en el momento de su realización é ignoran, por lo tanto, el modo como se produjo y las circunstancias que lo rodearon. Todos sus testimonios—Ruenaventura Vazquez fs. 5 a fs. 10—; Cesáreo Pizarro fs. 13 a fs. 17;—Lorenzo Yllescas fs. 19 a fs. 22—; Tranquilino Ordoñez fs. 23 a fs. 26—; Herminio Fer-

nández fs. 35 a fs. 40—; Antonio Segovia fs. 44 a fs. 46—; tienden a establecer, con más o menos precisión la existencia de relaciones amorosas entre la víctima Andrés Gimenez y la mujer Anita Torres, concubina del procesado Ortíz o Alvarado; pero tales relaciones aunque confesadas por la mujer Anita Torres, no parecen haber influido, en manera alguna, como causa determinante ni aun concurrente en el ánimo del procesado, en el homicidio que realizó, como se comprueba por la indagatoria del mismo en que confiesa que solo después de muerto, el individuo que encontró debajo del Aguay, es decir, después del segundo disparo, en la madrugada del día veintiuno de Enero de 1930, reconoció que era Andrés Gimenez, de manera que no pudo estar poseído de un sentimiento de celos hacia una persona que no sabía quién era.

La indagatoria del procesado Benito Ortíz o Asencio Alvarado, prestada ante la autoridad policial fs. 61 a 67 vta., ratificada en el Juzgado en lo Penal a fs. 77 y 78 y rectificadas en la parte que confesaba haber hecho un segundo disparo en la madrugada del día 21 de Enero, para atribuir ese disparo a su concubina Anita Torres, rectificación que vuelve a rectificar en el sentido de ser él el autor del mismo en el careo de fs. 79 y vta., comprueban en forma positiva y precisa que el procesado Benito Ortíz o Asencio Alvarado habiendo sentido ruido en la proximidad de la casa en que vivía en el lugar llamado «Cuña Muerta» a altas horas de la noche del 20 de Enero de 1930 se armó de una escopeta de tiro y salió guiado por el ladrido de los perros en dirección de un árbol de aguay, debajo del cual vió un hombre sentado y que al verlo llegar le dijo «que quería» y en ese mismo momento, el procesado le descendió un tiro; que al volver y no encontrar a su concubina, la buscó cerca del corral de cabras y con ella se fueron a la casa donde estuvieron amigablemente has-

ta que amaneció y acompañado con Anita Torres fueron a ver los efectos del disparo de la noche anterior, encontrando un hombre que se quejaba por estar herido y sin reconocerlo y a instancias de la mujer— según dice el reo— le hizo un nuevo disparo de muy cerca, que determinó la muerte inmediata del herido a quién recién reconocieron que era Andrés Gimenez, aún cuando— como ya lo dije anteriormente— el procesado Ortíz o Alvarado rectificó su indagatoria antes el señor Juez en lo Penal afirmando que el segundo disparo lo hizo su concubina, en el careo verificado en razón de la contradicción existente, el procesado volvió a rectificar su afirmación, confesando que el hizo tanto el primero como el segundo disparo sobre el cuerpo de Andrés Gimenez.

En consecuencia encuentro comprobado plenamente que Benito Ortíz o Asencio Alvarado dió muerte a Andrés Gimenez y en consecuencia voto por la afirmativa de la segunda cuestión planteada.

El Dr. Puló, adhiere al voto precedente.

A la 3ª. cuestión el Dr. Gudiño dijo:

La indagatoria prestada por Anita Torres no puede modificar, en mi concepto, la confesión del reo Ortíz o Alvarado que, si bien es cierto que aquella confiesa haber mantenido relaciones amorosas con Andrés Gimenez, con quién dice estuvo en el día del hecho y con quién convino en verse de noche, tales hechos parece haberlos ignorado ó no haberlos tenido en cuenta Ortíz o Alvarado según su propia confesión como no aparece confirmada por éste, la versión de Anita de que Ortiz o Alvarado los encontró a ella y a Gimenez debajo del Aguay y por ello hizo el primer disparo habiendo estropeado a su concubina después, pues las ratificaciones y careos lejos de corroborar esa afirmación, la desvirtúan. De manera que los celos, según la indagatoria del reo, no juegan ningún papel

en el hecho delictuoso realizado por Ortíz o Alvarado.

Luego pués, según la confesión de Benito Ortíz o Alvarado, podemos establecer en los hechos que produjeron la muerte de Andrés Gimenez, de que es único responsable el procesado, dos momentos perfectamente distintos: uno, a las veinticuatro más o menos del día 20 de Enero de 1930, y otro en la madrugada del 21 del mismo mes y año. Cuando a las 24 del 20 de Enero, Ortíz o Alvarado según propia confesión oyó ruidos y ladridos de perros y salió con su escopeta, encontró un hombre sentado debajo de un árbol y sin otro motivo que él encontrarlo allí y decirle «que quiere» le hizo un disparo y se volvió a la cama acompañado de su concubina realizó una parte del delito que pudo ser el punto terminal del mismo en el que la responsabilidad del victimario hubiera tenido varias atenuantes: la hora, el lugar, el miedo que puede producir un estado emocional muy de tenerse en cuenta, etc.

En el segundo momento, en la 2ª parte del delito, el procesado al ver un hombre inerte, herido, incapáz de llevar una agresión, cuyo estado necesitaba auxilio de personas caritativas, en vez de atenuar más los hechos, ya prestando auxilio a la víctima—cuya herida no era mortal según lo afirma el informe médico de fs. 48—resuelve ultimarle haciéndole un segundo disparo, realizando un otro hecho delictuoso con toda alevosía sin que haya razón alguna que lo justifique, circunstancia que evidencia la peligrosidad del reo.

Pienso por todo lo expuestos que el delito de que es autor Benito Ortíz o Asencio Alvarado, cae bajo la sanción del artículo 79 del Código Penal y que la pena impuesta es la que corresponde; voto en consecuencia por la afirmativa a la 3ª cuestión.

El Dr. Puló, adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó la audiencia quedando acordada la siguiente reso-

lución:

Salta, Abril 15 de 1931.

De conformidad a la votación que instruye el acuerdo que precede se confirma la sentencia recurrida, con costas.

Cópiese, notifíquese y baje.

C. PULÓ—D. E. GUDIÑO. ANTE MI: ANGEL NEO.

CAUSA—Embargo preventivo—Dolores Juárez Ceballos vs. Welindo R. Castillo

Salta, Abril 16 de 1931.

VISTOS:—Por la Sala en lo Civil de la Corte de Justicia los autos del juicio ejecutivo seguido por Dolores Juárez Ceballos contra Welindo R. Castillo, en apelación de la sentencia de fs. 54-6 y fecha 12 de Diciembre de 1930 en cuanto, admitiendo la excepción de falta de personería para representar a dos de los ejecutantes, rechaza la ejecución por las dos terceras partes del crédito; y

Considerando: que, según resulta del certificado de fs. 28-9, el poder invocado por el heredero de la acreedora, apersonada, al juicio por ella iniciado con el embargo preventivo, le fué otorgado por sus dos hermanos y coherederos para intervenir en el juicio sucesorio de Esther Juárez de Carrión e indiciar el juicio sucesorio de Dolores Juárez de Ceballos, pero con facultades de «promover y contestar cualquier demanda judicial», actuando «en cualquier acción judicial contenciosa o en juicios voluntarios... que se ofreciese para el arreglo de las dos mencionadas sucesiones», y la presente ejecución cabe dentro de ese objetivo, pues que, si bien los créditos se reputan divididos desde la apertura de la sucesión, los herederos pueden exigirlos juntos y hacerlos en la liquidación de la herencia para en la partición adjudicarlos a uno solo de ellos.

Revoca la sentencia apelada en la parte que ha sido materia del recurso, y, en consecuencia, manda llevar adelante la ejecución por el total del

crédito documentado a fs. 1, con costas, a cuyo efecto regula en quince pesos el honorario del doctor Atilio Cornejo por su trabajo en esta instancia.—Cópiese, repóngase, notifíquese y baje—David Saravia, Francisco F. Sosa—Humberto Cánepa—Secretario Letrado: Mario Saravia.

CA USA:—Daños y perjuicios.—Carlos Pereyra Rosas vs. Narciso Carpio

En la ciudad de Salta, a los diez y seis días del mes de Abril de mil novecientos treinta y uno, reunidos en su Salón de Audiencias los señores Ministros de la Excm. Sala en lo Civil, para conocer de los recursos de apelación interpuestos, a fs. 74 por don Narciso Carpio contra la sentencia del señor Juez "a-quo" de fecha Octubre 3 de 1930—fs. 66—72, en tanto ésta hace lugar a la demanda por daños y perjuicios que le sigue don Carlos Pereyra Rosas, y a fs. 76 por el representante de éste contra la misma sentencia en la parte que fija la indemnización a pagarse y exime de costas al vencido, la Sala planteó la siguiente cuestión a resolver:

Es legal la sentencia recurrida?

Practicado el sorteo para determinar el orden en que los señores Ministros emitirán su voto, resultó el siguiente: Saravia, Sosa y Cánepa.

A la cuestión planteada el Ministro Saravia dijo:

Debe, desde luego, rechazarse la pretensión de que el fallo contenga decisión relativa al dominio del automóvil dañado, pues el actor se atribuye su propiedad y el demandado no solo ha negado tal hecho sino que expresamente se refiere, en su contestación, al "coche del demandante" (fs. 4 vta.). Y menos puede pretenderse a este respecto un pronunciamiento de segunda instancia, pues, "el Tribunal" no puede "fallar en segunda instancia sobre ningún capítulo que no se hubiere propuesto a la decisión del inferior" salvo excepciones

extrañas al caso en cuestión (Cód. de Proc. Civil Art. 274).

No se trata de un daño producido, a un automóvil detenido, por un automóvil en marcha, caso en el cual, presumiéndose la culpa del conductor al dueño del automóvil que ha causado el daño correspondía la prueba de que no hubo culpa de su parte;—sinó de un choque entre dos automóviles en movimiento, caso en el cual el que demanda la indemnización total del daño sufrido corresponde la prueba de que se ha producido por culpa del demandado, sin perjuicio de la indemnización proporcional en caso de culpa concurrente.

Por las razones que expone el señor Juez "a-quo" considero que hay culpa concurrente Juzgo en consecuencia, que entre actor y demandado deben soportar conjuntamente las consecuencias del accidente; y que deben soportarlas por partes, pues no encuentro motivo en que pueda fundarse la desigual distribución establecida por el fallo recurrido.

Juzgo, por lo demás, arreglada a los resultados de la prueba, por los fundamentos del fallo apelado, la conclusión relativa a la importancia del daño sufrido por el automóvil del demandante. Y considero, por tanto, que el demandado debe ser condenado a pagar quinientos pesos o sea la mitad de dicho importe.

Y desprendiéndose de tal conclusión que la demanda ha prosperado solo en su mitad, resultando por tanto rechazada en su otra mitad las costas deben pagarse por su orden. Voto en tal sentido.

El Ministro Sosa dijo:

Pienso como el señor Ministro Saravia Castro que debe rechazarse la cuestión propuesta extemporáneamente por el demandado relativa al dominio del automóvil del actor, además de que, como lo hace notar aquel, en la contestación de la demanda se hace referencia al coche del demandante sin desconocérsele su propiedad.

En caso análogo al presente—"in-re"

José María Bemont vs. Juan José Martínez, 10 de Junio de 1930 esta Sala abordó in extenso el estudio de la culpa en orden a la cuestión doctrinaria que ha provocado en la práctica respecto de la prueba en juicio sosteniéndose por mi parte que no es posible adoptar una norma inflexible, porque si es el demandante quien debe probar, el principio actor probat actionem debe aceptarse como una regla absoluta, que no admite librar a las circunstancias de cada caso la determinación de la regla que corresponda seguir; mientras que si la prueba corresponde al demandado, el actor, una vez probado el hecho y el perjuicio, ambas cosas relativamente fáciles, tiene ya grandes probalidades de ganar el juicio.

También se consideró en el recordado caso que la ausencia de una ley especial en materia de accidentes de automóvil, reclamada imperiosamente por el estado social contemporáneo, obliga a juzgar los casos que se susciten aplicando los preceptos de nuestro código civil imbuídos en la clásica teoría romana del delito y cuasi delito.

Tratándose de cosa inanimada sujeta a la dirección de una persona como sucede en la especie sub-lite el art. 1133 del Cód. Civil dispone: "Cuando de cualquier cosa inanimada, resulte daño a alguno, su dueño responderá de la indemnización, sino prueba que de su parte no hubo culpa".

Esta presunción legal de culpa se impone para ambos litigantes en el caso ocurrente dadas las presunciones que surgen en su contra y que la sentencia en recurso establece con la apreciación rigurosa de las circunstancias en que ha debido producirse el accidente, pero sin que de ellas surja el mayor o menor grado de culpa en quienes dirigían los automóviles; habiendo resultado ineficáz la prueba rendida por cada parte para demostrar a su respecto falta de culpabilidad; en cuyo caso hay compen-

sación de perjuicios.

Pero como en la especie sub-lite no reclama indemnización el demandado, corresponde acordarla solamente al actor, por haber justificado su situación de perjudicado por el accidente, y cuyo monto estima justo apreciarlo en la cantidad de quinientos pesos moneda nacional.

Por estas consideraciones y fundamentos legales, adiero al voto del señor Ministro Saravia Castro.

El Ministro Cánepa adhiere al voto del Ministro Saravia Castro.

Con lo que término el acuerdo quedando adoptada la siguiente sentencia:

Salta, Abril 16 de 1931.

Y VISTOS:

Por el resultado de la votación de que instruye el acuerdo que precede:

LA SALA EN LO CIVIL DE LA CORTE DE JUSTICIA:

CONFIRMA la sentencia recurrida en cuanto condena al demandado a pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados por el accidente, reduciendo el monto de la misma a la cantidad de quinientos pesos y demandando pagar las costas por su orden.

Cópiese, repóngase, notifíquese y baje.—David Saravia.—Francisco F. Sosa.—Humberto Cánepa.—Secretario Letrado: Mario Saravia.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Nº. 14016—Salta, Octubre 6 de 1931.

Vistos los decretos del Gobierno Provisional de la Nación dictados en Acuerdo de Ministros de fechas 8 de Mayo, 28 de Agosto y 22 de Setiembre del corriente año, atento lo dispuesto por la Ley 8.871 de Elecciones Nacionales (Art. 23 y 53) y lo determinado por los Artículos 59, 67, 78 y 119 de la Constitución y 29 de la Ley de Elecciones de la Provincia,

Art. 1º.— Convócase al pueblo de la Provincia de Salta a objeto de que proceda a elegir diez Electores de Presidente y Vice—Presidente de la República y tres Diputados al H. Congreso de la Nación.

Art. 2º.— De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley N.º 8.871, cada Elector sólo podrá votar por siete Electores de Presidente y Vice—Presidente de la Nación y por dos Diputados al H. Congreso Nacional.

Art. 3º.— Convócase igualmente al pueblo de la Provincia a objeto de elegir Gobernador y Vice—Gobernados de la Provincia en la forma que lo determina el artículo 119 de la Constitución.

Art. 4º.— Convócase al pueblo de los Departamentos a elegir sus representantes a las HH. CC. Legislativas en la proporción que establecen los artículos 59 y 67 de la Constitución de la Provincia, de conformidad al Censo de 1914, en la siguiente forma: Siete Diputados titulares, siete suplentes y un Senador titular y un suplente por el Departamento de la Capital; dos Diputados titulares, dos suplentes y un Senador titular y un suplente por cada uno de los Departamentos de: Rosario de la Frontera, Orán y Metán; un Diputado titular, un suplente y un Senador titular y un suplente por los de: Cafayate, Cerrillos, Iruya, Candelaria, Caldera, Molinos, Santa Victoria, Guachipas, La Viña, La Poma, Campo Santo, San Carlos, Cachi, Rosario de Lerma, Rivadavia, Chicoana y Anta.

Art. 5º.— Designase el día 8 de Noviembre próximo para que tengan lugar las elecciones en todos los distritos electorales convocados.

Art. 6º.— Las Leyes 8871 y 11.387 regirán en las elecciones provinciales en todo lo relativo a los deberes, derechos y responsabilidades de los electores y emisión, recepción y escrutinio de votos y la Constitución y leyes locales en cuanto al régimen electoral de la representación. (Artículo 6º. del

Decreto del 22 de Setiembre del corriente año del Gobierno Provisional).

Art. 7º.— La Junta Escrutadora Nacional creada por la Ley 8.871 tendrá a su cargo las tareas preparatorias de los actos electorales provinciales y las operaciones de escrutinio, como asimismo todas las funciones que confieren al Tribunal Electoral los artículos 51, 122 y concordancias de la Constitución de la Provincia.

Art. 8º.— Publíquese el presente decreto hasta el día de la elección en el Boletín Oficial y dos diarios locales y por medio de bandos que se fijarán y distribuirán en parajes públicos, debiendo ser leídos por los Jueces de Paz donde no fuese posible otro medio de publicidad.

Art. 9º.— Hágase saber, comuníquese, publíquese, dêse al Registro Oficial y archívese.

E. MARTINEZ

Interventor Nacional

F. VALENZUELA.

Ministro de Gobierno.

FIGUEROA MEDINA

Oficial 1º de Gobierno

EDICTOS

Por José M. Leguizamón

JUDICIAL

Por disposición del Sr. Juez en lo Civil Dr. Cornejo Isasmendi y como correspondiente a la ejecución seguida por Angelina Martinez vs. Laudino Delgado, el 28 de Noviembre del corriente año a las 16 en mi escritorio Alberdi 323, venderé con base de \$ 8.000 ^{m/n}, una casa ubicada en esta ciudad, en la calle San Luis N° 426 al 430.

J. M. LEGUIZAMÓN

Martillero

QUIEBRA—Rendición de cuentas del Síndico y pedido de regulación de sus honorarios. — En la quiebra de **VICENTE B. CORDEYRO**, el Juzgado de Comercio. Secretaría Ferrary Sosa, ha proveído: — «Salta, Octubre 29 de 1931. Agréguese los diarios, recibos documentos presentados y proyecto de distribución formulado a sus antecedentes y pónganse los autos de manifiesto en Secretaría por el término perentorio de ocho días a fin de que los acreedores tomen conocimiento de su contenido y puedan hacer las observaciones que creen convenientes — Art. 119 de la Ley de Quiebras— Al efecto publíquense edictos por igual término en dos diarios y una vez en el Boletín Oficial y cítese a los acreedores a la audiencia que tendrá lugar el día dieciseis de Noviembre próximo a horas diez a fin de que fijen la retribución de los trabajos del Síndico — Art. 134 de la citada Ley.— **FIGUEROA**».

Lo que el suscrito hace saber.

Salta, Octubre 31 de 1931.

CARLOS FERRARY SOSA, Escribano Secretario. N° 1238

REMATE JUDICIAL— Por disposición del Sr. Juez en lo Civil, segunda nominación, doctor Florentin Cornejo, el día 14 de Diciembre de 1931, en el juicio Banco Constructor de Salta contra don Arturo Caillou, a horas once, en el local del Banco Constructor de Salta, venderé con la base de siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos, sesenta y seis centavos $\frac{m}{n}$, un terreno con dos

casas en él edificadas en el pueblo de Galpón, Departamento Metán.

F. CASTRO MADRID

Martillero

1239

SUCESORIO.— Por disposición del señor Juez de 1ª instancia en lo Civil y 3ª nominación de esta provincia, doctor Carlos Zambrano, se cita y emplaza por el término de treinta días, a contar desde la primera publicación del presente, a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por fallecimiento de doña

Felisa Gutiérrez de López

ya sean como herederos o acreedores, para que dentro de dicho término comparezcan por ante su Juzgado y Secretaría del que suscribe, a deducir sus acciones bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho.— Salta, Agosto 8 de 1931. — Oscar M. Aràoz Alemán, Escribano secretario

N° 1240

EDICTO DE MINAS.— Exp. N° 134— Letra C.— La Autoridad Minera de la Provincia, notifica a todos los que se consideren con algun derecho, para que los hagan valer, en la forma y dentro del término de Ley, que, el 22 de Octubre de 1931, don Luis Cardozo A; solicita permiso para exploración y cateo de minerales de primera categoria (excluyendo petróleo y demas hidrocarburos fluidos) en una extensión de 2.000 hectareas, en la finca «Tres Cruces», de propiedad del Concurso Macedonio Rodriguez y Romaris Elizalde, Departamento Rosario de Lerma de esta

Provincia, las que se ubicarán del modo siguiente:—Tomando como punto de partida la casa habitación de la señora Basilia Lamas, la que se encuentra situada a 4.000 metros al Oeste del lugar denominado «Pueblo Viejo», desde dicha casa se medirán hacia el Norte 2.000 metros, fijándose el esquinero Noreste, desde aquí se medirán al Poniente 4.000 metros fijándose el esquinero Noroeste, desde este punto se medirán 5.000 metros al Sud para fijar el esquinero Sudoeste, luego se medirán al Naciente 4.000 metros para fijar el esquinero Sudeste y desde este vértice hacia el Norte 3.000 metros, hasta encontrar el punto de partida o sea la casa de la señora Lamas.

Lo que el subscripto Escribano de Minas hace saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 3 de 1931.

Carlos Figueroa—Escribano de Minas 1241

SUCESORIO.— Por disposición del señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil, 2ª. Nominación, doctor Florentin Cornejo, se cita y emplaza por el término de treinta días, a contar desde la primera publicación del presente a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por fallecimiento de **VALERIANO COPA** y **RAFAELA V. de COPA**, ya sean como herederos o acreedores, para que dentro del término de ley comparezcan al Juzgado y Secretaria del suscripto, a deducir sus acciones en forma, bajo apercibimiento de ley

Salta Noviembre 2 de 1931

A. SARAVIA VALDEZ, Escribano Secretario 1242

DISOLUCION SOCIAL.— Habiéndose presentado los señores «Gil y Mannucci» manifestando que por es-

critura ante el Escribano Zenón Arias en fecha 15 de Octubre de 1931 se ha disuelto la sociedad «Gil Hermanos y Mannucci» y se ha constituido la nombrada «Gil y Mannucci» con domicilio en Estación Macapillo, teniendo la dirección general de los negocios en Tucumán,— el Juzgado de Comercio, Secretaría Ferrary Sosa, ordena su publicación por ocho días, en dos diarios y por una vez en el Boletín Oficial.

Salta, Noviembre 2 de 1931.

C. FERRARY SOSA.
SECRETARIO

Nº. 1243

SUCESORIO— Citación a juicio: Por disposición del señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil de esta Provincia, doctor Néstor Cornejo Isasmendi, hago saber que se ha declarado abierta la sucesión de doña

MARCELINA HERNÁNDEZ

y que se cita, llama y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por fallecimiento de la misma, ya sean como herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta días a contar desde la primera publicación del presente, comparezcan por ante este Juzgado o Secretaria del suscripto a deducir sus acciones en forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho.

Salta, Agosto 29 de 1931.

GILBERTO MENDEZ
Escribano-Secretario

1244